

LIMIA & MARTIN

Medio Ambiente



**Consultoría para la elaboración del análisis del
fortalecimiento de gestión ambiental: licenciamiento
ambiental**

Para

**Dirección General de Medio Ambiente y Cambios
Climáticos**

Estado Plurinacional de Bolivia

**En el marco del PBL de Fortalecimiento de la Gestión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Banco Interamericano de Desarrollo**

Código: PE16080

Fecha: 30 Diciembre 2016

Fdo: Imanol Martín Landa

Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Introducción	7
3. Objetivos	10
4. Ámbito y actividades del trabajo	10
5. Estructura institucional y análisis de competencias	11
6. Instrumentos de regulación de alcance particular	13
7. La categorización de actividades y proyectos nuevos	15
8. Las actividades existentes	17
9. La Evaluación de Impacto Ambiental	18
9.1. Procedimiento general de Evaluación de Impacto Ambiental	18
9.2. Excepciones al procedimiento general en la normativa sectorial	21
10. La autorización	22
11. La apelación	23
12. La fase de operación: seguimiento y monitoreo	23
13. Sanciones	24
14. Aspectos transversales	25
14.1. Guías y documentación de criterios de las administraciones públicas	25
14.2. Fechas límite para los pasos de la tramitación de licencias	25
14.3. Ampliaciones y modificaciones	26
14.4. Renovación y traspaso de las licencias ambientales	27
14.5. Silencio administrativo positivo	27
14.6. Recursos materiales y financieros	27
15. Consultores ambientales y laboratorios	28
16. Prácticas en otros países	29
17. Propuesta de lineamientos para el licenciamiento ambiental	53
17.1. Estructura institucional y análisis de competencias	53
17.2. Instrumentos de regulación	59



17.3. Categorización de actividades y proyectos nuevos.....	64
17.4. Las actividades existentes	68
17.5. La Evaluación de impacto ambiental.	69
17.6. La fase de operación: seguimiento y monitoreo	73
17.7. Guías.....	74
17.8. Tiempo de tramitación y fechas límite	76
17.9. Silencio administrativo positivo	77
17.10. Consultores ambientales	78
17.11. Recursos materiales y financieros	79
18. Referencias	83

Acrónimos

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental

EEIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

FA: Ficha Ambiental

MA: Manifiesto Ambiental

MPM: Medidas de Prevención y Mitigación

PASA: Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta un análisis del proceso de otorgamiento de licencias ambientales en Bolivia basado en el análisis de la normativa de Bolivia, en entrevistas a distintas personas que participan en este proceso y en un análisis de la normativa de varios países del entorno de Bolivia. El trabajo realizado se ha centrado principalmente en identificar oportunidades de mejora del proceso desde el punto de vista de su eficiencia y eficacia, y de su fortalecimiento para la protección del medio ambiente. A partir de las oportunidades de mejora identificadas, se han propuesto recomendaciones que se han agrupado en lineamientos.

Los lineamientos que ofrecen mayores posibilidades de mejora del proceso de licenciamiento son los siguientes:

- Reorganizar las competencias en materia de licenciamiento ambiental reforzando el papel de los Departamentos, transfiriendo actividades y competencias de la autoridad competente nacional a los departamentos, de los departamentos a los municipios grandes¹, y del resto de los municipios a los departamentos.
- Mejorar la relación entre el sistema de licenciamiento ambiental y el mantenimiento de la calidad ambiental y la implementación de políticas ambientales. Utilizar los instrumentos del licenciamiento ambiental para mejorar la calidad ambiental de zonas degradadas, mantener la calidad de zonas protegidas y para implantar políticas especiales en materia ambiental.
- Adoptar metodologías para la realizar la Evaluación Ambiental Estratégica de planes, políticas y programas para evaluar el impacto ambiental de éstos y metodologías de evaluación de efectos ambientales acumulativos
- Categorizar las actividades sobre la base de un modelo más objetivo y estandarizado con las características que se describen más adelante.
- Revisar el método para otorgar la licencia ambiental para actividades sin licencia ambiental iniciadas posteriormente al plazo establecido en la normativa.

¹ Se deberá establecer cuál es el tamaño de los municipios considerados grandes desde el punto de vista de si van a poder disponer de suficientes recursos para asumir las responsabilidades de licenciamiento ambiental y del control de las actividades. Como referencia, en Ecuador se consideran los mayores de 1.000.000 de habitantes.

- Convertir la definición del alcance del EEIA en un instrumento que contribuya a mejorar la calidad de los EEIA y, junto con las medidas de prevención y mitigación, a implantar las políticas ambientales y a asegurar la calidad ambiental del medio
- Modificar el modelo de revisión del EEIA y la participación de los distintos actores que intervienen. Realizar revisiones en paralelo. Hacer que el proceso sea dirigido por el órgano ambiental competente
- Priorización del proceso de inspección y mejora de su eficiencia. Modificar el régimen de sanciones para hacerlo proporcional al grado de afección al medio ambiente producido por la infracción, y disuasorio
- Homogeneizar los criterios técnicos y ambientales a emplear en el licenciamiento de actividades, mediante la coordinación de criterios entre el Ministerio y los organismos sectoriales
- Elaborar guías para mejorar la calidad de los estudios presentados con el fin de que las medidas de prevención y mitigación sean más apropiadas y de que su tramitación y corrección lleve menos tiempo

Este informe presenta en los capítulos 3 y 4 los objetivos, el ámbito del trabajo y las actividades del proyecto. Después, en los capítulos 5 y 6 describe hallazgos relacionados con la estructura institucional y, brevemente, datos cuantitativos sobre el número de proyectos que se legalizan al año para los distintos instrumentos de regulación de alcance particular de Bolivia. A continuación, en el capítulo 7, describe el sistema de categorización de estos proyectos que se basa en el riesgo de impacto ambiental y que sirve para determinar el grado de evaluación ambiental que se requiere en cada proyecto antes de la concesión de la licencia ambiental. Los siguientes apartados del informe, del 8 al 15, tratan sobre la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, la autorización ambiental, la apelación, el seguimiento y monitoreo de proyectos en funcionamiento, las sanciones, aspectos transversales al proceso de licenciamiento, y los consultores ambientales y laboratorios. Después de estos temas el capítulo 16 incluye prácticas en otros países, concretamente en Perú, Colombia y Ecuador, que pueden ser de interés en Bolivia para proporcionar opciones a considerar de cara a la modificación del sistema de licenciamiento ambiental. A continuación, el capítulo 17 presenta una propuesta de lineamientos para la modificación del sistema de licenciamiento ambiental. La presentación de cada uno de estos lineamientos contiene la descripción del lineamiento, los hallazgos relacionados con la propuesta, los beneficios esperados de su adopción, y las acciones para su puesta en práctica.



2. Introducción

El presente diagnóstico presenta las conclusiones del análisis del proceso de licenciamiento ambiental en Bolivia derivadas del análisis de la normativa ambiental aplicable a la obtención de licencias ambientales, y de información obtenida en una serie de entrevistas realizadas a diversas instituciones o actores intervinientes en el proceso durante dos misiones de los consultores ambientales a La Paz, la primera entre el 10 y el 14 de Octubre de 2016, y la segunda entre el 21 y el 25 de Noviembre de 2016. En estas misiones se mantuvieron contactos con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, de otros organismos sectoriales (minería, hidrocarburos, carreteras, y telecomunicaciones) y con consultores ambientales acreditados para la preparación de solicitudes de licencias ambientales. También se contrastaron algunas conclusiones y propuestas con consultores ambientales contratados por el BID.

Las conclusiones que se presentan en este diagnóstico se refieren a aspectos que, a juicio de los consultores ambientales, pueden mejorarse en el proceso de licenciamiento ambiental. Para varios de estos aspectos, se presentan recomendaciones de mejora.

En Bolivia, la normativa relativa a licencias ambientales tuvo su origen en la Ley No 1333 de 1992, que estableció el marco normativo en el que inscriben las licencias ambientales, así como aspectos generales de política ambiental, marco institucional, planificación ambiental y otros. En 1995, el Decreto Supremo N° 24176, aprobó varios reglamentos de desarrollo de dicha ley, como el Reglamento General de Gestión Ambiental y el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, que desarrollaron este marco normativo y detallaron en sus aspectos fundamentales los procedimientos de otorgamiento de licencias ambientales. También con este Decreto Supremo N° 24176 se aprobaron otros Reglamentos que desarrollaron aspectos concretos de la normativa ambiental que deben ser tenidos en cuenta al otorgar licencias ambientales. Por ejemplo, el Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica, el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas y el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. Con esto se definió el marco normativo básico relativo a licencias ambientales de Bolivia.

Desde entonces, se han aprobado algunos reglamentos ambientales que regulan sectores productivos de especial relevancia en la economía de Bolivia como los de hidrocarburos (1996) actividades mineras (1997), sector manufacturero (2002) o, más recientemente, el de Aprovechamiento de Áridos y Agregados (2009). Estos reglamentos han definido requisitos técnicos a cumplir por los proyectos de estos sectores con el fin de proteger el medio ambiente y, en materia de licenciamiento, entre otras cosas, plazos para determinados pasos del procedimiento de obtención de licencias, o proyectos sujetos a Certificado de Dispensación, que simplifica su tramitación. Otras disposiciones reglamentarias se han ido aprobando en distintos años para modificar distintos aspectos normativos en esta materia.



En resumen, el marco normativo básico para el otorgamiento de licencias ambientales se estableció a mediados de los años 90 del siglo pasado, y, en sus aspectos fundamentales, ha permanecido sin modificaciones importantes.

Más recientemente aún, se ha aprobado la Ley de Gestión Integral de Residuos (2015) que modifica el marco normativo general en materia de residuos.

En los últimos años se han aprobado varias normas generales que requerirán una revisión de la normativa mencionada. Se trata de la Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010)

Por otra parte, en 2008 se aprobó una nueva Constitución en Bolivia, que modificó el marco legal general del país.

Bolivia tiene una población de 10,72 millones, con un Producto Interior Bruto de 33,20 billones de dólares (datos tomados de la página web del Banco Mundial de 2015); el crecimiento de su PIB en 2015 fue del 4% anual, con una inflación del 4,1%. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Gobierno de Bolivia (2015), *“Desde 2006, la inversión pública registró un aumento sustancial y se constituyó en el principal eje dinamizador de la economía. En efecto, la construcción de carreteras, caminos, escuelas, hospitales, la creación de empresas públicas productivas, los proyectos de industrialización, la inversión en plantas generadoras de electricidad, el desarrollo de programas y proyectos para mejorar y ampliar la provisión de servicios básicos y otros, implicaron un movimiento económico importante en cuanto a generación de empleo y producción de bienes y servicios. Por ejemplo, entre 2005 y 2013 la tasa de desempleo se redujo de 8,1% a 3,2%, respectivamente, y la economía registró un crecimiento promedio de 5,1% (2006 – 2014) superior al 3,0% del período neoliberal (1985 – 2005).”*

En los últimos años, Bolivia ha experimentado un cambio en el sector productivo que ha pasado a ser público en gran parte, y recientemente una mayoría de las solicitudes de licencias (el 90% según declaraciones de funcionarios públicos del país) son del sector público.

El Gobierno de Bolivia ha aprobado recientemente el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Si bien varios de los pilares definidos en este plan están relacionados con el desarrollo sostenible, el Pilar 9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, menciona objetivos y acciones directamente relacionados con el objetivo del presente trabajo. Entre otros objetivos a lograr para 2020 establece el que *“se han transformado y reestructurado los procesos de gestión ambiental, implementando procedimientos ambientales eficaces y eficientes en concurrencia con las Entidades Territoriales Autónomas vinculadas a medidas de fiscalización, vigilancia y control ambiental”*. Entre las acciones mencionadas para alcanzar los objetivos definidos está *“Implementar un procedimiento*

ambiental rápido y expedito en concurrencia con las Entidades Territoriales Autónomas vinculado a medidas de fiscalización, control y sanción.”

Por otro lado, se ha elaborado el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, y, existe un programa para la reforma de la Ley de Medio Ambiente y del sistema de licenciamiento. También se está trabajando en la reforma de los reglamentos de Minería, y en nuevo reglamento para el sector de telecomunicaciones.

El presente proyecto pretende contribuir a definir los lineamientos estratégicos dirigidos a reformar el ordenamiento jurídico de Bolivia en lo relativo a las licencias ambientales con el propósito de mejorar la protección de la calidad ambiental del país, y de ganar en eficiencia y eficacia en la adopción de decisiones de protección del medio ambiente mediante el otorgamiento de licencias ambientales.

En este sentido, los beneficiarios del proyecto serán varios:

- o Los promotores de proyectos y actividades, tanto públicos como privados, que se beneficiarán de una toma de decisiones más eficiente y, por lo tanto, que les permitirá iniciar sus proyectos en un menor plazo. También se beneficiarán de una mayor eficacia en la protección ambiental que, en el largo plazo, les evitará posibles costes asociados a la remediación de pasivos ambientales.
- o Los funcionarios públicos de los distintos niveles de la administración pública, en la medida en que se logre que la toma de decisiones esté mejor definida y estandarizada y ello les permita analizar los expedientes administrativos en un mejor tiempo y, en general, tener una menor carga administrativa de tramitación de expedientes de licencias ambientales. Esto a su vez, debiera permitirles disponer de más recursos para ejercer la labor de inspección y seguimiento de las actividades tanto autorizadas como ilegales.
- o El pueblo de Bolivia en general, en la medida en que un sistema de otorgamiento de licencias ambientales que logre una mayor protección ambiental contribuirá a mejorar la calidad ambiental del país, y por tanto, a mejorar la salud de las personas y el disfrute del medio ambiente.
- o Los recursos humanos de los organismos con competencias en medio ambiente se encuentran ocupados en las tareas de análisis y procesamiento de las solicitudes de licencias ambientales lo que da lugar a una insuficiente dedicación a labores de inspección, al desarrollo de metodologías estandarizadas que permitan mejorar la calidad de la información proporcionada en las solicitudes de licencia, y al desarrollo de aspectos legales que mejoren la gestión ambiental en general (como valores límite de emisión, metodologías de caracterización de residuos y otros).



3. Objetivos

El objetivo de este trabajo es elaborar la propuesta de lineamientos para la reforma y transformación del sistema de licenciamiento ambiental que permita alcanzar la eficiencia, eficacia, sostenibilidad económica con calidad ambiental, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, así como la normativa conexa.

4. Ámbito y actividades del trabajo

El presente trabajo se centra en los procesos de otorgamiento de licencias ambientales de Bolivia, en la normativa aplicable y en las prácticas existentes en el proceso de otorgamiento de licencias ambientales.

Las actividades del trabajo son las siguientes:

1. Elaboración de un diagnóstico de la Estructura Institucional y Legal del Sistema de Licenciamiento Ambiental actual, enfatizando la identificación de los puntos problemáticos que contribuyan a la ralentización, ineficiencia e ineficacia del sistema. El objetivo de esta actividad es determinar los roles de las diferentes actores con respecto al licenciamiento ambiental, así como identificar vacíos, debilidades y principales presiones y amenazas del mismo. Se deberá relacionar con las buenas prácticas internacionales, que derivan en sistemas de gestión de licenciamiento más expeditos, ágiles, eficientes y eficaces.
2. Sobre la base de los problemas identificados, se propondrán lineamientos de acción para el desarrollo de la propuesta de reforma del proceso de licenciamiento ambiental. Estos lineamientos incluirán la implementación y desarrollo de herramientas de control y monitorización que derivará de una redistribución de los recursos destinados a las diferentes labores de licenciamiento, control y monitoreo ambiental, con el fin de mejorar la relación coste-beneficio ambiental de las actividades llevadas a cabo por el Viceministerio, así como la propuesta de establecimiento de un marco institucional que permita una articulación de los procesos de licenciamiento ambiental entre las instancias ambientales, considerando el análisis competencial.
3. Elaboración de entrevistas a personal técnico y a responsables políticos de los departamentos o áreas responsables del otorgamiento de licencias ambientales y de otros departamentos que participen en el proceso.



5. Estructura institucional y análisis de competencias

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (DS N° 24176 de 1995) asigna competencias en materia de licenciamiento ambiental al gobierno central y a los departamentos (Art. 9 y 10), en función de la localización de los proyectos y de sus impactos, y de participación en la revisión de documentos como el formulario de FA, el EEIA y el MA a los municipios (Art 11) y a los organismos sectoriales competentes en el ámbito de su competencia (Art 12).

En determinadas normativas sectoriales, este esquema general se modifica. Por ejemplo, el Reglamento Ambiental para el Sector Manufacturero, que es aplicable a industrias con la excepción de las del sector de hidrocarburos, de minería y metalúrgicas, establece que el Prefecto es el competente para “expedir o negar la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) y la Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) sobre la base del informe de revisión de la Instancia Ambiental del Gobierno Municipal IAGM”, y a su vez, el gobierno municipal es competente para “registrar y categorizar las actividades industriales conforme a las disposiciones del presente Reglamento” y para “revisar los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular de las industrias de Categorías 1 y 2 y remitir los informes de revisión a la Instancia Ambiental dependiente del Prefecto IADP”. Además, las actividades industriales tienen la obligación de registrarse en el llamado Registro Ambiental Industrial en la Instancia Ambiental del Gobierno Municipal donde vayan a localizarse o donde se localicen si son actividades existentes.

Sin embargo, la Ley 31 Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 87 establece que el Nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de “Elaborar, reglamentar y ejecutar los regímenes de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental”. También, en su artículo 75, abre la posibilidad de transferir total o parcialmente una competencia, o, en su artículo 76, de delegarla. Por tanto, se abre la posibilidad de que el nivel central del estado transfiera o delegue total o parcialmente competencias en materia de licenciamiento ambiental (ver más adelante propuesta de lineamiento en relación con las competencias en licenciamiento ambiental).

La distribución de competencias entre distintos ministerios da lugar a duplicidades en determinadas actividades de revisión de documentos de licenciamiento y de monitoreo e inspección de las actividades licenciadas (ver más adelante la sección 12), y a diferencias de criterio entre distintos organismos. Por ejemplo, se da una duplicación de esfuerzos entre organismos sectoriales, municipios, departamentos y ministerio en la revisión de documentación relacionada con la solicitud de licencias (revisión del formulario de FA, EEIA, y el MA). Evitar estas duplicidades es especialmente deseable dado que la tarea de otorgamiento de licencias ambientales impone una excesiva carga administrativa en el organismo competente en el ámbito nacional en relación con los departamentos y con los organismos sectoriales.

Sin embargo, con algunas excepciones, en los Departamentos y en los municipios, que tienen competencias en materia de licenciamiento ambiental, no hay suficientes recursos humanos, y los



que existen no tienen suficiente capacitación para asumir las responsabilidades de licenciamiento ambiental que les asigna la actual normativa. La insuficiencia de recursos humanos afecta también a la administración central competente en materia de licenciamiento ambiental y al SERNAP, que participa aportando información. Por esta falta de recursos, aunque la normativa existente asigna responsabilidades importantes en el licenciamiento a Departamentos y Municipios, en la práctica no las están ejerciendo salvo parcialmente, sino que es el organismo competente nacional quien asume gran parte del trabajo. Esto se traduce en una excesiva dedicación de los recursos humanos del Ministerio a la tarea de otorgamiento de licencias ambientales.

Los organismos sectoriales de determinados sectores productivos como hidrocarburos, minería, energía y otros, tienen asignadas responsabilidades en materia de licenciamiento ambiental. En algunos tipos de proyectos, es la administración sectorial nacional quien gestiona los proyectos, mientras en otros lo hacen las gobernaciones en el ámbito de los Departamentos, como en los proyectos de exploración. Las solicitudes de licencia ambiental son primero analizadas en el organismo sectorial. Una vez la documentación presentada es considerada adecuada por el organismo sectorial, pasa al órgano ambiental para su análisis. En ocasiones, como se ha apuntado más arriba, surgen diferencias de criterios entre los organismos sectoriales y el órgano competente en materia ambiental.

Por otro lado, la práctica existente en Bolivia de regular aspectos ambientales de manera sectorial puede dar lugar a que un determinado sector aborde temas de manera distinta a como se aborda en una norma general, o a que un sector aborde temas que en principio debieran ser de aplicación general. Por ejemplo, la elaboración de normativa sobre residuos dentro de la normativa sectorial de actividades mineras², o la de límites máximos permisibles para suelos dentro de la normativa del sector de hidrocarburos³. Esta práctica puede dar lugar a una fragmentación elevada de determinada

² Así, el Art. 33 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (DS N° 24782) clasifica las acumulaciones de residuos sólidos entre otros aspectos por la peligrosidad, indicando que son “aquellos que contienen elementos o compuestos que hacen que el residuo conlleve una o varias de las características de peligrosidad señaladas en el artículo 2° del Reglamento para Actividades con Substancias Peligrosas, aprobado por D.S. N° 24176 de 8 de diciembre de 1995”. Una definición de lo que es un residuo peligroso, o una acumulación de residuos peligrosos como ésta debiera estar en una normativa de aplicación general, de otro modo, podrían darse contradicciones entre cómo dos normativas regulan el mismo aspecto. De hecho, en la definición de residuo peligroso del artículo 9 del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos se presenta una definición de residuo peligroso distinta, que requiere no sólo que el residuo posea las mencionadas características de peligrosidad, sino que conlleven “un riesgo potencial al ser humano o al ambiente”.

³ Anexo 7 del Reglamento Ambiental Para el Sector de Hidrocarburos (DS 24335, de 1996)



normativa, como la de residuos, que en principio debiera ser de aplicación general, y a la definición de diferentes criterios, o a un coste más elevado de la elaboración de normas para mantener su coherencia.

Un problema general en las distintas administraciones es el movimiento del personal. Así, aunque en un momento dado un organismo esté dotado de personal experimentado, puede suceder, después de varios cambios de personal, que esta experiencia se pierda para ese organismo. Más adelante en el informe se proponen medidas que pueden ayudar a reducir los efectos negativos de esta movilidad como la elaboración de guías.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) solo se ocupa de zonas protegidas nacionales. También los departamentos pueden definir áreas protegidas subnacionales, en cuyo caso si un proyecto prevé localizarse en una de esas zonas, deberá tenerlo en cuenta. El DS N° 24781, que aprueba el Reglamento de Áreas Protegidas, establece que puede haber áreas protegidas de carácter nacional o departamental, y áreas protegidas de carácter privado que también pueden adscribirse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También establece distintas categorías de manejo de las áreas protegidas: parque, santuario, reserva de Vida Silvestre, Área Natural de Manejo Integrado y Reserva Natural de Inmovilización. Además, define distintos niveles de zonificación, entendida como el ordenamiento del uso del espacio, que establece zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de manejo, es decir, distinto nivel de protección, que los proyectos tienen que respetar.

6. Instrumentos de regulación de alcance particular

En Bolivia, para obtener la licencia ambiental antes de iniciar una actividad nueva, el promotor debe presentar una ficha ambiental que describe las características de la actividad a iniciar y del entorno en que se va a localizar la actividad. A partir de la información proporcionada, dependiendo de la dimensión e impacto ambiental potencial de la actividad sobre el medio ambiente y de la sensibilidad del lugar en que se va a instalar, el órgano ambiental asigna la actividad a una de cuatro categorías. Las actividades de categoría 1, las de mayor impacto ambiental, deben realizar un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral, que finaliza con una Declaratoria de Impacto Ambiental Integral, que tiene carácter de licencia ambiental. Las de categoría 2 deben realizar un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico, que finaliza en una Declaratoria de Impacto Ambiental Específica. Las de categoría 3 requieren únicamente el planteamiento de Medidas de Mitigación, y de un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, que, por las características ya conocidas de proyectos similares, permita definir acciones para evitar o mitigar los efectos adversos de estas actividades. Por último, las actividades de categoría 4 son las que no están consideradas dentro de las tres categorías anteriores, no requieren adoptar medidas especiales, debiendo cumplir la Reglamentación de Alcance General, y reciben un certificado de dispensación.

Las actividades existentes en el momento de aprobarse el Reglamento General de Gestión Ambiental dispusieron de un período de 5 años (hasta el año 2000) para obtener la licencia ambiental mediante un instrumento específico, la Declaratoria de Adecuación Ambiental. Ésta se basa en la evaluación del Manifiesto Ambiental y fija las condiciones ambientales que deben cumplirse de acuerdo con el Plan de Adecuación y con el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. La Declaratoria de Adecuación Ambiental tiene carácter de licencia ambiental.

La siguiente tabla muestra la estimación del número de licencias ambientales otorgado en los últimos años obtenida a partir del seguimiento de las tramitaciones de licencias que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Tabla 1. Estimación de licencias por tipo de proyecto entre 2012 y 2016						
Sector	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4	Declaración de Adecuación Ambiental (Actividades existentes)	Total
Agropecuario		8	43	88	39	178
Comunicaciones			17	23	56	96
Educación y Cultura			15	44	12	71
Energía	5	14	48	485	29	581
Hidrocarburos	58	67	90	84	203	502
Industria y Turismo		2	45	26	62	135
Minería	9	38	9		173	229
Multisectorial	1	5	22	46	84	158
Recursos Hídricos		16	69	50	100	235
Salud Pública y Seguridad Social			15	4	21	40
Saneamiento Básico		11	34	51	43	139
Transporte	7	106	135	14	25	287
Urbanismo y Vivienda			32	41	91	164
Total	80	267	574	956	938	2.815

Se observa que los proyectos de categoría 4 son los más frecuentes, y que el número de proyectos de categoría 1 es pequeño. La categoría 4 de actividades o proyectos, que corresponde con la que tiene menor impacto ambiental, supone prácticamente el 50% de todas las actividades nuevas iniciadas en los últimos años, o el 34% de todas las licencias ambientales (ver Tabla 1). Si bien muchas de estas actividades de categoría 4 serán tramitadas con un procedimiento relativamente

sencillo por requerir únicamente un Certificado de Dispensación (por ejemplo, el definido en los artículos 115 a 117 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, 1997), la mera tramitación de estas solicitudes supone una duplicación de tareas pues estas actividades tienen que estar inscritas en otros registros del país, como el Registro de Comercio que lleva la empresa FUNDEMPRESA.

La normativa sectorial de determinados sectores, como el de hidrocarburos o el de minería, ha introducido procedimientos simplificados para otorgar la licencia ambiental a proyectos menores. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos la normativa sectorial ha introducido la figura de las addenda, como un método simplificado aplicable a ciertas modificaciones menores a los proyectos que permite legalizar estas modificaciones mediante procedimientos simplificados que finalizan con algo similar a la elaboración de Medidas de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (MPM+PASA).

El Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero ha introducido la posibilidad de que si una empresa de categoría 1 o 2 va a instalarse en un parque industrial que cuenta con una licencia ambiental, no requerirá elaborar un EEIA, y únicamente deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para obtener la autorización de implementación de la unidad industrial.

En determinados responsables del órgano competente en materia ambiental existe la percepción de que no se está haciendo un uso suficiente del sistema de licenciamiento para mejorar la calidad ambiental y para aplicar políticas de protección ambiental. En el apartado 17 se presentan propuestas para mejorar este aspecto.

Por otro lado, la actual Ficha Ambiental no es un instrumento adecuado para usarlo como base de partida para iniciar Evaluaciones Ambientales Estratégicas de políticas, planes y programas pues se centra en aspectos muy concretos del medio físico o de un proyecto físico concreto. Por el contrario, la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas puede requerir que se evalúen los aspectos ambientales más genéricos de estos instrumentos, y de una forma más amplia y desligada del territorio o de los aspectos físicos de un proyecto concreto.

En opinión de técnicos y responsables políticos del órgano competente, el análisis de los efectos acumulados de proyectos individuales no se está realizando de forma adecuada. En algún caso, para el desarrollo de campos de hidrocarburos, se ha hecho una evaluación ambiental estratégica, lo que ha permitido considerar mejor los impactos ambientales acumulados.

7. La categorización de actividades y proyectos nuevos

El sistema de categorización de las nuevas actividades utilizado para definir el tipo de procedimiento de obtención de la licencia ambiental que el promotor debe seguir se basa en un método que requiere



utilizar criterios y ponderaciones no están estandarizados (Metodología de Identificación de Impactos Ambientales (IIA) de la Ficha Ambiental, Anexo I del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, 1995). Esto hace que, para el promotor, en determinados casos, no esté claro cuál es la decisión que va a adoptar la autoridad competente ni el tiempo que puede requerir la tramitación de la licencia ambiental. De hecho, en la práctica, se dan casos en que hay diferencias en las decisiones de categorización de actividades entre los organismos sectoriales y el órgano ambiental competente.

Además, el mencionado sistema de categorización de las actividades establece que la categoría de actividades cuyo impacto es el mínimo de todas las definidas en la normativa (categoría 4) se aplica prácticamente a todas las actividades que no se encuentran definidas en las otras tres categorías de mayor impacto ambiental. Esto da lugar a que, teóricamente, todas las actividades productivas menores de Bolivia, independientemente de su tipo, deban obtener una licencia ambiental, a no ser que sean explícitamente excluidas en la normativa. Como consecuencia, un elevado número de actividades de muy pequeño impacto solicita licencia ambiental, contribuyendo a la saturación de los funcionarios encargados de analizar y procesar los expedientes administrativos de solicitud de licencias. En determinados municipios, los técnicos encargados de analizar y tramitar las solicitudes de licencia ambiental se ven sobrecargados de trabajo con proyectos de muy poco o nulo impacto ambiental. En conversaciones del consultor con distintos actores que intervienen en el proceso de licenciamiento se mencionaron ejemplos de proyectos de poco impacto ambiental como edificios de cuatro plantas, hoteles o actividades de catering.

Por otra parte, tampoco están estandarizados los requisitos que debe cumplir una determinada actividad, y se dan casos en que para una misma actividad que va a legalizarse en distintos municipios se establecen requisitos distintos e incluso es asignada a distintas categorías.

De acuerdo con la normativa sobre áreas protegidas, los proyectos que vayan a desarrollarse en ellas son de Categoría 1.

El Reglamento Ambiental para el Sector Industria Manufacturero tiene otro enfoque que consiste en usar la capacidad de producción para categorizar las actividades. En la práctica, hay pocas actividades industriales pertenecientes a las categorías 1 y 2. La mayoría de estas actividades corresponden a la categoría 3. De acuerdo con este reglamento, las actividades de categoría 4 únicamente deben registrarse en el municipio correspondiente en el que vayan a instalarse o estén instaladas, en la Instancia Ambiental del Gobierno Municipal.

Por otra parte, las empresas en general deben registrarse en el registro de comercio. Este registro es gestionado por la empresa FUNDEMPRESA. En su tramitación se pide mucha información que después se pide también en la solicitud de licencia ambiental.

8. Las actividades existentes

Como se ha comentado más arriba, las actividades existentes en el momento de aprobarse el Reglamento General de Gestión Ambiental dispusieron de un período de 5 años (hasta el año 2000) para obtener la licencia ambiental mediante un instrumento específico, la Declaratoria de Adecuación Ambiental. Ésta se basa en la evaluación del Manifiesto Ambiental y fija las condiciones ambientales que deben cumplirse de acuerdo con el Plan de Adecuación y con el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental.

El procedimiento de la Declaración de Adecuación Ambiental se ha utilizado en la práctica después del año 2000 para otorgar la licencia ambiental a actividades que en realidad habían iniciado su funcionamiento después de este año. También, en determinadas actividades de exploración minera que tenían licencia ambiental para realizar la exploración (que corresponde a la categoría 3), se ha utilizado para otorgar la licencia ambiental a la actividad de explotación minera posterior (que, dependiendo de su dimensión puede corresponder a la categoría 1 o a la 2). Este tipo de tramitación se da en otros casos; la actividad se inicia y se solicita el Manifiesto Ambiental porque para el promotor es más barato y rápido que hacer un EIA. En muchos casos se está convirtiendo en el método de obtención de licencia ambiental más frecuente, y muchos promotores incluso prefieren pagar la multa que se establezca, pero iniciar la actividad primero, y después obtener la licencia ambiental por esta vía.

De acuerdo con estimaciones proporcionadas por funcionarios del organismo sectorial de minería, en Bolivia hay unas 6000 explotaciones mineras, de las cuales sólo 400 tienen autorización ambiental. Este dato probablemente refleja un caso particular, ya que el sector minero es especial en dos aspectos. Primero porque es un sector especialmente frecuente en el país, y segundo porque una parte significativa del número de explotaciones corresponde a minería artesanal, de pequeña escala, que es más difícil que disponga de los conocimientos y medios para legalizar la actividad desde el punto de vista ambiental.

El Reglamento Ambiental para actividades mineras establece un procedimiento simplificado para el cierre de actividades mineras de exploración o para Actividades Mineras Menores con Impactos Ambientales Conocidos no Significativos (AMIAC). En estos casos, el operador únicamente debe ejecutar medidas de cierre y rehabilitación, un informe detallando las medidas adoptadas y un dictamen favorable de un auditor inscrito en el registro de consultores del Ministerio responsable en materia de medio ambiente. Esto es aplicable a determinadas actividades de escala reducida definidas en el mencionado reglamento, localizadas en determinadas áreas del país que no sean zonas protegidas.



9. La Evaluación de Impacto Ambiental

9.1. Procedimiento general de Evaluación de Impacto Ambiental

En este apartado se analiza el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental definido de manera general en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Algunos aspectos particulares definidos en los reglamentos sectoriales se presentan en el apartado 9.2.

Procedimiento administrativo general

La documentación presentada por el promotor de una actividad es inicialmente revisada por el organismo sectorial competente, por ejemplo, el organismo sectorial de minería en los proyectos de este sector, y después por el organismo competente en materia ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Esta tramitación sucesiva por dos organismos supone que no se puede analizar el proyecto en paralelo por todos los técnicos implicados, de manera que, para cualquier plazo que se establezca, se duplica el tiempo para el promotor. Por ejemplo, para la revisión de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental el plazo para la revisión del EEIA en la mayoría de organismos sectoriales es de 30 días, y el plazo para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es también de 30 días. La posibilidad de realizar la revisión en paralelo permitiría reducir los plazos totales para el promotor a la mitad. En la práctica, cada organismo que interviene suele pedir al promotor modificaciones a la documentación de la documentación presentada y le otorga un plazo de 30 días para realizarlas. Esto hace que al plazo inicial de 30 días haya que sumar el tiempo para las modificaciones (quizá otros 30 días) y el nuevo plazo para la revisión (quizá hasta 30 días), con lo que el tiempo total para el promotor puede llegar a 90 días. Si esta revisión la realizan dos organismos consecutivamente para el mismo proyecto, los plazos totales frecuentemente se duplican.

La definición del alcance de los EEIA

El Reglamento de Prevención y Control Ambiental no define con suficiente claridad el proceso a seguir para establecer el alcance del EEIA. Aunque este reglamento sólo lo indica para proyectos de categoría 2, en la práctica la autoridad competente en materia ambiental establece el alcance de este estudio tanto en los proyectos de Categoría 1 como en los de categoría 2. Sin embargo, la base para definir ese alcance no está suficientemente detallada en la normativa; por ejemplo, no se define la necesidad de realizar una descripción detallada del proyecto y del entorno en el lugar donde se localizará el proyecto, ni de implicar a las partes interesadas para identificar sus preocupaciones en relación con el proyecto. Tampoco existe un modelo detallado para el contenido del documento de alcance del EEIA (por ejemplo, en una guía metodológica). Esta situación no favorece que los EEIA que después presenten los consultores tengan la calidad deseada por el órgano ambiental competente, ni que el nivel de exigencia a los estudios tienda a ser homogéneo. Ello tampoco favorece que los EEIA puedan ser utilizados como instrumentos que reflejen las prioridades políticas

ambientales y que permitan la implantación de estas políticas. La norma tampoco define cuál es la participación de los distintos ministerios que pueden tener conocimientos técnicos relevantes para ello en la definición del alcance del EEIA.

El contenido de la ficha ambiental, tal como aparece establecido en el formulario del Anexo 1 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, presenta suficiente información (en términos genéricos) para definir el alcance del EEIA, pero para que este alcance sea definido con suficiente detalle para asegurar la calidad del EEIA, la información a presentar por el promotor debiera tener un detalle y una profundidad mucho mayores que las que pueden aportarse con el espacio disponible en el formulario.

Una vez definido el alcance del EEIA en detalle, éste debiera utilizarse en la revisión del EEIA realmente presentado después por el promotor para analizar la calidad del EEIA.

La consulta al público

En la Constitución de Bolivia se establece el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados, en consulta realizada por el Estado, respecto a la exploración de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan⁴. Además, las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer la competencia exclusiva de “participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten”⁵. Por otro lado, también establece que “la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”⁶ y, “La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada”⁷.

En la mayor parte de los sectores la consulta pública durante el EEIA se realiza en el marco de lo descrito en el Artículo 162 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental. La hace el promotor en la fase de identificación de impactos a considerar en un EEIA y su objetivo es tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público que pueda verse afectado por la

⁴ Art. 30.II.15 de la Constitución Política del Estado Nacional de Bolivia.

⁵ Art. 304.I.21 de Idem.

⁶ Art. 343. de Idem.

⁷ Art. 352. de Idem.



implementación del proyecto. Este artículo prevé que si en el EEIA no estuviese prevista la consulta, la autoridad ambiental competente someterá el EEIA a un período de consulta pública.

De manera general la consulta al público mencionada en el Art. 162 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental es una socialización del proyecto a la sociedad civil, facilita recoger las inquietudes del público en general durante la realización del EEIA y puede dar lugar a medidas que aborden esas inquietudes. En algunos casos las empresas promotoras tienen programas internos para la realización de consultas al público e incorporan este aspecto en su modo normal de proceder en el desarrollo de proyectos. La empresa llega a un acuerdo con las comunidades, que no siempre muestra una relación entre el impacto ambiental y lo acordado. La administración competente en materia ambiental exige un proceso mínimo de consulta y, si el proyecto va a tener un impacto, la empresa está obligada a adoptar medidas. El informe de EEIA debe aportar una información que muestre que ha habido una consulta pública. El promotor debe comunicar al órgano ambiental competente cuándo va a ser la consulta, debe enviar a éste las notas de comunicación que indiquen el área de influencia, un acta de la consulta, una lista de asistentes a la consulta y el acta firmada por los asistentes.

En determinados casos, como en los proyectos del sector industrial, la consulta al público se hace poniendo la información descriptiva del proyecto en un lugar público para que se revise y solicitando que los comentarios del público se envíen por escrito.

En proyectos del sector de hidrocarburos se realiza una consulta y participación a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas por el organismo sectorial competente en materia de hidrocarburos y energía. La consulta se realiza en dos momentos: el primero previamente a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o proyectos; y el segundo previamente a la aprobación de los EEIA. La consulta a pueblos indígenas se hace cuando el proyecto es de categoría 1 y se encuentra en tierras comunitarias de origen de uso ancestral, en cuyo caso la realiza el estado a través de los organismos sectoriales o del ministerio cabeza del sector. Al final de la misma se firma un acta de validación de acuerdos.

En la consulta y participación regulada bajo el Decreto Supremo 29033, el promotor tiene la obligación de presentar la descripción del proyecto. La consulta debe finalizar en un acta de conformidad, que contiene las consideraciones que los pueblos quieren que se tengan en cuenta en el proyecto. Esta acta tiene que formar parte del EEIA.

En Bolivia, la participación pública es conflictiva. Se han dado casos en que la consulta pública ha dado lugar a situaciones violentas, particularmente en el sector de minería.

También en la normativa hay la opción de la audiencia pública, pero no se conocen casos.



Los EEIA

Uno de los problemas identificados en los EEIA es que no se hace un análisis del impacto ambiental acumulado de los distintos proyectos que se dan en una determinada zona.

La revisión de los documentos presentados (FA, estudio de EEIA, MPM+PASA, MA)

Durante la revisión de los documentos presentados por los promotores para obtener la licencia ambiental, los organismos sectoriales a veces tienen criterios distintos que el Ministerio competente en materia ambiental; por ejemplo, sus técnicos mandan quitar cosas de los documentos que luego el Ministerio manda poner otra vez. Esto aumenta el tiempo que lleva elaborar estos documentos a los consultores ambientales. De acuerdo con algunos consultores, también distintas personas del Ministerio competente en medio ambiente tienen criterios diferentes. En otros muchos casos, los comentarios de los técnicos de los distintos organismos que intervienen coinciden.

Habitualmente, los técnicos de un organismo (sea el sectorial o el competente en medio ambiente) tienen un plazo inicial para revisar el documento presentado por el promotor, envían una petición de modificaciones al promotor y, después de recibir una nueva versión corregida, tienen un segundo plazo para volver a revisar la documentación. En la gran mayoría de los casos, los funcionarios públicos hacen observaciones a los documentos. Si el documento se devuelve varias veces para que se corrija el promotor tiene que iniciar de nuevo el trámite.

La revisión de la documentación se realiza primero por el organismo sectorial, y una vez que éste ha terminado, se realiza por el órgano competente en materia ambiental.

Cuando la petición de una licencia ambiental es gestionada por los Departamentos, el Ministerio competente en materia de medio ambiente debe homologar las decisiones adoptadas por el Departamento. Esto consume mucho tiempo de los técnicos del Ministerio. Distintas personas entrevistadas manifestaron su opinión de que esta homologación no debiera ser exigida.

9.2. Excepciones al procedimiento general en la normativa sectorial

En el sector de hidrocarburos tienen medidas de simplificación por la que un cambio menor se puede abordar con un informe ambiental.

En el sector hidrocarburos hay una consulta inicial al público, y durante el EEIA un proceso de Consulta y Participación pública (D.S. 29033) que, en este sector, debe ser realizado por el organismo sectorial cuando se trata de un proyecto de Categoría 1.

Según varias personas consultadas, este proceso de Consulta y Participación pública del sector de hidrocarburos no ha sido bueno para la EIA, porque se usa por el público para negociar contrapartidas en cuestiones no ambientales. Recientemente, con el fin de evitar que los costes de



estas medidas escalasen hasta valores muy elevados, se han fijado en normativa unos montos fijos para medidas de compensación a las comunidades, lo que ha limitado las demandas que previamente realizaban las comunidades locales en temas de salud o educación. Sin embargo, estos montos se calculan en forma de % de la magnitud del proyecto, y cuando el proyecto es muy grande, p.ej 10% de 100 millones, puede llegar a ser también una cantidad excesiva.

Como norma, la única consulta pública es la consulta pública que se realiza después del EIA.

10. La autorización

Algunas personas entrevistadas en el presente proyecto opinaban que el sistema de licenciamiento debe estar ligado al monitoreo de la calidad ambiental y permitir la aplicación de instrumentos de política ambiental. Por ejemplo, de forma que los requisitos y medidas de mitigación puedan ser distintos en distintas zonas geográficas para reflejar el problema ambiental específico de cada zona.

Sin embargo, en la práctica, a la hora de definir las condiciones de las licencias ambientales de un proyecto concreto, el órgano competente en materia ambiental no contrasta información con los datos ambientales disponibles en la zona en que se va a establecer el proyecto. En parte esto se debe a que en determinados aspectos ambientales falta información sobre la calidad del entorno de los proyectos; por ejemplo, la mayoría de los cuerpos de aguas superficiales no ha sido clasificada de acuerdo con las clases que establece el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.

La vigencia de la licencia ambiental es de 10 años⁸. Si bien este período puede parecer conveniente para adecuar las condiciones de la licencia a la realidad cambiante de las actividades, de su entorno y al avance de los conocimientos, por otro lado, el renovar la licencia con esa frecuencia obligará a los organismos responsables de tramitar las solicitudes a un aumento en las tareas de procesamiento de información cuando las actividades soliciten esta renovación.

El Reglamento Ambiental para el Aprovechamiento de Áridos y Agregados permite modificaciones de hasta el 33% en la capacidad de operación sin necesidad de actualizar la licencia ambiental⁹. Este tipo de disposiciones proporcionan flexibilidad a la licencia ambiental de modo que la actividad que autoriza pueda ser modificada sin necesidad de alterar su licencia, favorecen la evolución de las actividades y no sobrecargan con trabajo a los organismos que intervienen en el otorgamiento de la licencia.

⁸ Art. 15 del DS N° 28592 de 2006.

⁹ Art. 17.



En determinados sectores como el de industria, la licencia ambiental puede ser transferida a otra persona jurídica; en otros sectores no. En el sector de transporte la ejecución de los proyectos se hace por distintos operadores. Por tanto la licencia ambiental se transfiere a otra organización u organismo. Sin embargo, en la normativa no está establecida la posibilidad de transferencia de la licencia.

11. La apelación

La normativa vigente permite apelar decisiones de la autoridad ambiental competente como la categorización, y el rechazo del EEIA o del MA¹⁰. La autoridad competente para conocer la apelación es el Ministerio competente en materia de medio ambiente. También pueden ser objeto de apelación las resoluciones que se dicten en el marco de peticiones de audiencia que se promuevan ante una autoridad competente dentro del marco de la participación ciudadana relacionada con la gestión ambiental. Por último, son objeto de apelación las resoluciones sancionadoras adoptadas en el marco del análisis de infracciones administrativas¹¹.

12. La fase de operación: seguimiento y monitoreo

La autoridad ambiental elige qué inspecciones tiene que hacer con el organismo sectorial, el departamento y los municipios. Las inspecciones de actividades en funcionamiento se realizan por un número excesivo de funcionarios de distintos organismos: en las inspecciones participan miembros no sólo del órgano ambiental competente, sino también del organismo sectorial, y del departamento y el municipio en el que se encuentra la actividad e incluso del SERNAP si la actividad afecta a una zona protegida. Se considera que este modo de proceder resta capacidad de inspección al conjunto de funcionarios capacitados para hacerlas, pues las visitas de inspección podrían ser realizadas por un funcionario, o a lo sumo dos, con suficiente capacitación y si se dispusiera de una metodología estandarizada y eficaz de inspección.

Algunos Departamentos tienen personal capacitado para realizar el control, aunque quizá no en todos los casos, dependiendo del Departamento y el sector concreto de que se trate.

Diversas personas entrevistadas consideran que es necesario homologar o estandarizar los requisitos que las distintas gobernaciones piden a las actividades. En la actualidad en determinados tipos de proyectos el mecanismo de decisión sobre los requisitos a establecer en las autorizaciones se ha

¹⁰ Art. 172 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental.

¹¹ Art 101 de la Ley 1333 de Medio Ambiente.



dejado a las gobernaciones y se observa que distintos Departamentos establecen requisitos distintos. No hay compatibilización de requisitos entre la gobernación y la autoridad ambiental.

En las visitas de inspección no se pueden tomar muestras (de vertidos, de residuos, otras) porque no existe presupuesto suficiente para ello.

Los monitoreos y las inspecciones deben ser realizados por personas dedicadas a estas actividades, pues son muy específicas y diferentes de la legalización de actividades (análisis de expedientes y otorgamiento de licencia ambiental). El tipo de metodología a utilizar en labores de inspección es muy específica.

En Minería, el operador emite un informe semestral y lo envía al organismo sectorial, al Ministerio competente en materia ambiental y a los departamentos. El organismo sectorial analiza el informe y envía comentarios al operador, pero no al Ministerio competente en materia ambiental. Por su parte, el Ministerio competente no envía comentarios a los operadores. La práctica de enviar informes al Ministerio competente en materia ambiental es general en distintos sectores. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos el informe se envía a la autoridad que ha otorgado la licencia ambiental y al organismo sectorial. Las inspecciones se coordinan para las actividades hidrocarburíferas de mayor envergadura, sísmicas, perforación, o donde hay problemas sociales.

En el sector de minería se reconoce que hay falta de capacidad institucional en municipios y gobernaciones para hacer fiscalización. En este sentido, un problema es que cada 5 años hay un cambio total del personal municipal.

13. Sanciones

En la actualidad las sanciones no muestran una gradación suficiente en función de su gravedad y, en particular, del impacto producido en el medio ambiente. Las sanciones, de imponerse, no sólo tendrían un efecto incentivador del cumplimiento de las condiciones de la licencia ambiental para la actividad sancionada sino, lo que es más importante, para el resto de actividades, por el efecto ejemplarizante de las sanciones en todas las actividades.

Dos casos particulares son el de las empresas en funcionamiento que no tienen licencia ambiental, y el de empresas activas que solicitan la licencia ambiental por la vía del Manifiesto Ambiental. El primer caso debiera tener una consideración especial, con campañas de concienciación e inspección dirigidas específicamente a estas actividades, pues la existencia de empresas sin legalizar socava todo el proceso de licenciamiento ambiental. Respecto al segundo caso, en el apartado 17 se propone un lineamiento específico.



14. Aspectos transversales

14.1. Guías y documentación de criterios de las administraciones públicas

Los trabajos presentados por los consultores ambientales son en muchos casos de calidad insuficiente.

Por otro lado, en diversos aspectos, distintas administraciones y organismos muestran criterios distintos en el proceso de licenciamiento ambiental. No hay una suficiente definición y estandarización, explícita y documentada, de criterios para la toma de decisiones, lo que permite que los criterios adoptados varíen. Esto es percibido por los administrados como falta de coordinación entre los distintos organismos competentes. Por ejemplo, distintas partes intervinientes que intervienen en el proceso informaron que frecuentemente los distintos organismos muestran criterios contradictorios en sus solicitudes de modificaciones de la documentación, con lo que el promotor se ve obligado a rehacer o eliminar modificaciones previamente solicitadas.

Existen guías internas (manuales de procesos y procedimientos) para la evaluación de estudios de impacto ambiental en el sector de minería, hidrocarburos, y “multisector”. En carreteras, existe un manual ambiental para carreteras, y un manual ambiental para la construcción de ferrovías. Sin embargo, las guías existentes no son lo suficientemente detalladas en relación, por ejemplo, con el contenido que deben tener los EEIA, como para asegurar la calidad de estos estudios. Las 3 guías elaboradas para la tramitación de IRAPs están accesibles en Internet. Estaban previstas para ayudar a los técnicos a revisar, pero se han facilitado también a los consultores ambientales. Sin embargo, sólo son aplicables en el ministerio de medio ambiente porque no han sido aprobadas por una resolución ministerial en otros ministerios sectoriales. No existen guías para promotores sobre el licenciamiento.

En el ministerio de medio ambiente el personal no tiene estabilidad en su puesto de trabajo: en 3 años el equipo de personas que trabaja en licencias ambientales ha cambiado 6 veces. El personal tiende a cambiarse a otros puestos. Esta movilidad del personal hace que sea aún más necesario explicitar los criterios para la toma de decisiones en el proceso de licenciamiento, y documentarlos. También debería haber guías con medidas mínimas de mitigación para cada sector. Algunas personas entrevistadas opinaron que hay cosas que son tan estándar que deberían estar establecidas en guías. Ello podría ayudar a un licenciamiento más ágil, especialmente para actividades de tamaño intermedio o pequeño.

14.2. Fechas límite para los pasos de la tramitación de licencias

En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos de la estimación del tiempo que transcurre desde que el promotor solicita la licencia ambiental por primera vez hasta que se obtiene, obtenida de

declaraciones de consultores ambientales con experiencia en Bolivia. Los valores presentados son indicativos del tiempo total, incluyendo el necesario para que los funcionarios analicen la información presentada y los consultores corrijan las deficiencias encontradas por los funcionarios en la documentación, y por tanto, representan el efecto de la eficiencia total real de todos los factores que influyen en el licenciamiento.

Tabla 2. Ejemplos de tiempo que transcurre desde la primera solicitud de licencia ambiental hasta su obtención, para los sectores de minería e hidrocarburos por categoría de proyecto.			
Sector	Categoría I	Categoría II	Categoría III
Minería	24 meses	Mínimo: 8 meses Máximo: 16 meses Media: 14 meses	6-8 meses
Hidrocarburos	12 meses	6-7 meses	3-4 meses

El tiempo necesario para revisar la documentación e informes presentados para la obtención de licencias es considerado excesivo por distintos actores que participan en el proceso de licenciamiento ambiental.

En hidrocarburos los plazos para la revisión de los documentos de licenciamiento ambiental son demasiados cortos, pero se establecieron en esos valores porque lo pidió el propio organismo sectorial sector.

Tras el análisis del informe de EIA, si hay comentarios, habitualmente se dan 30 días al consultor para hacer correcciones al informe.

Según manifestaciones de personal entrevistado en el proyecto, el SERNAP no cumple los plazos (por falta de personal) y causa retrasos a los sectores.

El autor del presente proyecto considera que los plazos de algunos pasos del procedimiento de otorgamiento de licencias resultan excesivamente cortos, especialmente para proyectos grandes.

14.3. Ampliaciones y modificaciones

No está suficientemente definido en qué casos de ampliaciones o modificaciones de los proyectos es necesario que el promotor solicite una modificación en su licencia ambiental o una nueva licencia.



14.4. Renovación y traspaso de las licencias ambientales

En algunos sectores es posible traspasar la licencia de un promotor a otro, pero no en todos. La licencia ambiental tiene una vigencia de 10 años¹². Cuando corresponda, el representante legal del proyecto deberá solicitar la renovación de la licencia con una antelación de 120 días hábiles antes de la fecha de su vencimiento.

14.5. Silencio administrativo positivo

El silencio administrativo positivo unido a plazos de tramitación cortos puede dar lugar en proyectos grandes a que se acepten las medidas de prevención y mitigación insuficientes.

14.6. Recursos materiales y financieros

En la administración de Bolivia han estado trabajando sobre la informatización del sistema de licenciamiento ambiental, empezando con el sector de telecomunicaciones como un caso piloto. Tienen el objetivo de tramitar la licencia ambiental “on line”. Han desarrollado los flujogramas del proceso que están ya aprobados; falta elaborar los programas informáticos correspondientes. Por otra parte, está pendiente de definir y poner en marcha la firma digital de las autoridades.

En la opinión del consultor redactor de este trabajo, el problema de informatizar el proceso de licenciamiento es que si se decidiera cambiar el procedimiento administrativo habría que cambiar el programa, y ello puede suceder con suficiente frecuencia como para que el programa pase a quedar obsoleto a menudo.

Por otra parte, existe un sistema informatizado, el Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA) que puede facilitar determinados aspectos del sistema de licenciamiento. Más adelante, en el apartado 17 se propone un lineamiento en este ámbito.

Por otro lado, sería muy útil para la toma de decisiones en el proceso de licenciamiento ambiental tener la información ambiental existente en Bolivia accesible en un Sistema de Información Geográfica para los distintos actores que intervienen en este proceso.

En relación con la disponibilidad de medios materiales y recursos para las labores administrativas del otorgamiento de licencias y para la realización del control posterior de las actividades, en la actualidad los recursos son claramente escasos en muchos municipios, en los departamentos, e incluso en el Ministerio competente en materia de medio ambiente. Por ejemplo, las labores de

¹² D.S. 28592 de 17 de Enero de 2006.



inspección de actividades no suelen incluir la toma de muestras y su análisis por falta de partida presupuestaria para esta actividad.

15. Consultores ambientales y laboratorios

Como se ha comentado más arriba, la documentación y los trabajos presentados por los promotores (elaborados por los consultores) para la solicitud de licencias ambientales son frecuentemente de calidad insuficiente.

Existe un Registro Nacional de Consultores Ambientales (RENCA) para la incorporación de profesionales en un registro oficial. Sin embargo, los requisitos para incorporar personal a ese registro son pequeños, y en la práctica puede incorporar a cualquiera que curse un curso de medio ambiente. El actual registro no permite discriminar actividades distintas en función de la formación o experiencia de los profesionales y, de hecho, se dan casos en que abogados hacen fichas ambientales porque están inscritos en el RENCA. Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha contratado un proyecto de consultoría para mejorar el sistema de registro. Por ejemplo, en la nueva propuesta de reglamento RENCA se requiere disponer de equipos multidisciplinarios con 4 técnicos para poder hacer EEIA de actividades, se establecen categorías para estudios sociales, y se definen categorías en los profesionales según su conocimiento y experiencia.

El Ministerio competente en materia ambiental exige registrar los especialistas. Sin embargo, el redactor del presente informe considera que esto no debiera ser obligatorio, pues la formación especializada de estos profesionales es suficiente garantía de solvencia.

Por otro lado, como se ha comentado más arriba en el caso de las guías, antes de poder establecer medidas disciplinarias con los consultores registrados por trabajos realizados con calidad insuficiente es necesario definir claramente cuál es el mínimo requerido para los trabajos, de forma que no existan dudas respecto a lo que se espera de los profesionales. Ello podría establecerse mediante guías. De otro modo la base para sancionar a los profesionales sería muy pequeña y sujeta a discrepancias entre las distintas partes implicadas.

Algunas personas entrevistadas opinaron que los trabajos de consultoría han sufrido un deterioro en los últimos años.

Por otro lado, los laboratorios no tienen suficiente acreditación en materia de calidad. Los laboratorios no tienen capacidades para medir determinados parámetros químicos en agua. Hay un registro de laboratorios, pero la acreditación no es obligatoria para realizar análisis químicos que puedan utilizarse en control y seguimiento de las actividades. En Bolivia no tienen laboratorios de referencia. Varias personas entrevistadas consideraban que era necesario fortalecer los mecanismos de control

de los laboratorios que realizan muestreos con el fin de garantizar la independencia y representatividad de las muestras tomadas.

16. Prácticas en otros países

Se ha realizado un análisis de prácticas de licenciamiento ambiental de países del entorno de Bolivia con el fin de identificar aquellas que puedan proporcionar referencias útiles para el desarrollo de normativa en Bolivia en este ámbito. Los países seleccionados han sido Perú, Ecuador y Colombia. La siguiente tabla presenta una selección de prácticas identificadas en estos países que se han considerado de interés para Bolivia. Ello no implica se considere que estas prácticas son aplicables, sino que pueden aportar ideas de interés para Bolivia en el proceso de definición de la normativa sobre licencias ambientales.

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Categorías de proyectos	Los proyectos de la Categoría I no requieren un EIA. Los proyectos de la Categoría II son aquellos con impactos moderados que pueden ser mitigados mediante medidas relativamente simples. En estos proyectos se requiere un EIA "semi-detallado".
Perú	Alcance-Términos de referencia	El proponente del proyecto presenta una propuesta de categorización de la actividad y una propuesta de términos de referencia para el EIA, si es el caso. La autoridad competente aprueba los términos de referencia.
Perú	Actividades comunes	La autoridad competente podrá establecer los mecanismos para la clasificación y definición de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental de actividades comunes en el sector que le corresponda
Perú	Registro de entidades autorizadas para EIA	Las autoridades competentes deberán establecer un registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios de impacto ambiental.
Perú	Revisión del EIA	El proponente deberá presentar el estudio de impacto ambiental a la autoridad competente para su revisión. Asimismo la autoridad competente, en los casos establecidos mediante decreto supremo, solicitará la opinión de otros organismos públicos e instituciones. Para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), correspondientes a proyectos clasificados en la categoría III, la autoridad competente podrá establecer un mecanismo de revisión que incluya a las autoridades sectoriales, regionales o locales involucradas.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Participación ciudadana	La autoridad competente, durante la etapa de clasificación, tiene la facultad de solicitar a la comunidad o representantes o informantes calificados, los antecedentes o las observaciones sobre la acción propuesta. b) El proponente y su equipo técnico presenta un plan de participación ciudadana y su ejecución. c) La autoridad competente efectúa la consulta formal durante la etapa de revisión, sólo en los casos de los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados. Estos estudios se pondrán a disposición del público, para observaciones y comentarios, en la sede regional del sector respectivo. La convocatoria se hará por los medios de prensa de mayor difusión, mediante la publicación de un aviso de acuerdo con el formato aprobado en el Reglamento de la presente Ley, cuyo costo será asumido por el proponente. Asimismo, la difusión se realizará por medios electrónicos de comunicación. La audiencia pública, como parte de la revisión del estudio de impacto ambiental detallado, se deberá realizar a más tardar 5 (cinco) días antes del vencimiento del período de consulta formal.
Perú	Seguimiento y control	La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. El seguimiento, supervisión y control se podrá ejecutar a través de empresas o instituciones que se encuentren debidamente calificadas e inscritas en el registro que para el efecto abrirá la autoridad competente. Las empresas o instituciones que elaboren los estudios de impacto ambiental no podrán participar en la labor de seguimiento, supervisión y control de los mismos.
Perú	Autoridades competentes	Son autoridades competentes las autoridades nacionales y sectoriales que poseen competencias ambientales. La autoridad competente para cada tipo de proyecto que quede comprendido en el listado de inclusión a que se refiere el Artículo 4º de la presente Ley, es el Ministerio del Sector correspondiente a la actividad que desarrolla la empresa proponente o titular del proyecto. En caso de que el proyecto incluyera dos o más actividades de competencia de distintos sectores, la autoridad competente será únicamente el Ministerio del Sector al que corresponda la actividad de la empresa proponente por la que ésta obtiene sus mayores ingresos brutos anuales.
Perú	Contenido del EIA	a) Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia; b) La identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales negativos, según corresponda, en todas las fases y durante todo el período de duración del proyecto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el ciclo de vida del producto o actividad, así como el riesgo ambiental, en los casos aplicables y otros instrumentos de gestión ambiental conexos; c) La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono o cierre; d) El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente; e) Los planes de seguimiento, vigilancia y control; f) La valorización económica del impacto ambiental; g) Un resumen ejecutivo de fácil comprensión; y, h) Otros que determine la autoridad competente.
Perú	Resolución de certificación ambiental	Culminada la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, se elaborará un informe técnico-legal que sustente la evaluación que haga la autoridad indicando las consideraciones que apoyan la decisión, así como las obligaciones adicionales surgidas de dicha evaluación si las hubiera. Dicho informe será público. Con base en tal informe, la autoridad competente, expedirá la Resolución motivada, correspondiente.
Perú	Seguimiento y control en ESIA	El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, es responsable del seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental estratégica.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Funciones del Organismo Rector (Ministerio del Ambiente)	<p>Revisar, de manera aleatoria, los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades competentes, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.</p> <p>Aprobar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de políticas, planes y programas.</p> <p>Emitir opinión previa favorable y coordinar con las autoridades competentes, el o los proyectos de reglamentos relacionados a los procesos de evaluación de impacto ambiental –EIA y sus modificaciones;</p> <p>Coordinar con las autoridades competentes la adecuación de los regímenes de evaluación del impacto ambiental existentes a lo dispuesto en la presente Ley y asegurar su cumplimiento;</p> <p>Llevar un Registro administrativo de carácter público y actualizado de las certificaciones ambientales concedidas o denegadas por los organismos correspondientes. Dicho registro indicará además la categoría asignada al proyecto, obra o actividad;</p> <p>Controlar y supervisar la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, así como resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos que se le formulen por infracciones a esta norma.</p>
Perú	Autoridades Competentes de administración y ejecución	<p>Serán consideradas como autoridades competentes de administración y ejecución, el Ministerio del Ambiente, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales.</p> <p>Corresponde a las autoridades sectoriales emitir la certificación ambiental de los proyectos o actividades de alcance nacional o multiregional, en el ámbito de sus respectivas competencias.</p> <p>Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su competencia.</p> <p>Salvo que la ley disponga algo distinto, la autoridad competente a la que se deberá solicitar la certificación ambiental será aquella del sector correspondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores ingresos brutos anuales.</p> <p>Si el proyecto o actividad cuya certificación ambiental se solicita corresponda a otro sector, la autoridad receptora de la solicitud deberá requerir la opinión del sector competente.</p>
Perú	Ámbito del SEIA	<p>Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación del SEIA, las políticas, planes y programas propuestos por las autoridades de nivel nacional, regional y local que pudieran originar implicaciones ambientales significativas.</p> <p>Asimismo, los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto propuestos por personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que comprendan obras, construcciones y actividades extractivas, productivas, comerciales, de servicios, entre otros, que sean susceptibles de causar impactos ambientales significativos de carácter negativo y que vayan a ejecutarse dentro del territorio nacional, incluyendo las áreas de dominio marítimo e insulares.</p>

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Funciones de las Autoridades Competentes	<p>Son autoridades competentes en el marco del SEIA, las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades locales con competencia en materia de evaluación de impacto ambiental. Las Autoridades Competentes a cargo de la evaluación de los estudios ambientales tienen las siguientes funciones:</p> <p>Conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales de los proyectos de inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias.</p> <p>Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo su competencia, Emitir normas, guías técnicas, criterios, lineamientos y procedimientos para regular y orientar el proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a su cargo, en coordinación con el MINAM. Aprobar la clasificación y los Términos de Referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado y del estudio de impacto ambiental detallado, bajo su ámbito.</p> <p>Requerir, cuando corresponda, la opinión técnica de otras autoridades con competencias ambientales y merituarla; así como emitir dicha opinión cuando le sea requerida, conforme a Ley.</p> <p>Otorgar en forma exclusiva y excluyente la Certificación Ambiental para las Categorías I, II y III.</p> <p>Realizar acciones de fiscalización posterior para comprobar la veracidad de la información recibida en el proceso de evaluación de impacto ambiental.</p>
Perú	Ejercicio de las competencias de las autoridades de nivel regional y local en el Sistema de EIA	Las Autoridades Competentes del nivel regional y local, emiten la Certificación Ambiental de los proyectos de inversión que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su competencia; y cuyos efectos se circunscriban a la respectiva región o localidad,
Perú	Funciones de las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, en el ámbito del SEIA	<p>Las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en los niveles sectorial, nacional, regional y local, ejercen sus funciones en el ámbito del SEIA de acuerdo al mandato dispuesto en sus leyes orgánicas y/o de creación y sus normas complementarias. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, órgano rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es responsable de ejercer las siguientes funciones, en el marco de sus competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos que se formulen por infracciones a la Ley y el presente Reglamento. - Supervisar y fiscalizar en ejercicio de sus competencias, el debido cumplimiento de las normas y obligaciones derivadas de los estudios ambientales y aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a la legislación vigente. - Hacer seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas comprendidas en la Evaluación Ambiental Estratégica y en el Informe Ambiental de Evaluación Ambiental Estratégica que haya emitido el MINAM. - Establecer y conducir el Registro de entidades Supervisoras con fines de Fiscalización Ambiental,
Perú	Instrumentos de Gestión Ambiental del SEIA	<p>Los instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del SEIA son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Declaración de Impacto Ambiental – DIA (Categoría I). - El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIA-sd (Categoría II). - El Estudios de Impacto Ambiental Detallado – EIA-d (Categoría III). - Evaluación Ambiental Estratégica – EAE.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Alcances de la Certificación Ambiental	<p>La Certificación Ambiental implica el pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre la viabilidad ambiental del proyecto, en su integridad. Dicha autoridad no puede otorgar la Certificación Ambiental del proyecto en forma parcial, fraccionada, provisional o condicionada, bajo sanción de nulidad.</p> <p>Aquellos proyectos que por sus características técnicas y espaciales (obras viales interprovinciales, multimodales u otros) precisen de consideraciones especiales para su evaluación ambiental, no están comprendidos en el alcance del presente artículo. En tal sentido, la Autoridad Competente debe señalar de manera expresa y mediante Decreto Supremo, Ordenanza Regional u Ordenanza de la Municipalidad, según corresponda, los proyectos que están sujetos a esta excepción y los criterios a adoptar en tales casos.</p>
Perú	Autoridad competente para otorgar la Certificación Ambiental	<p>Corresponde a las autoridades sectoriales del nivel nacional emitir la certificación ambiental de los proyectos de alcance nacional o multiregional en el ámbito de sus respectivas competencias. Corresponde a las autoridades regionales y locales, emitir la certificación ambiental de los proyectos que dentro del marco del proceso de descentralización resulten de su competencia.</p> <p>Salvo que la Ley disponga algo distinto, la Autoridad Competente a quien corresponde solicitar la Certificación Ambiental, es aquella del sector correspondiente a la actividad del titular por la que éste obtiene sus mayores ingresos brutos anuales.</p>
Perú	Otorgamiento de licencias, derechos y autorizaciones para proyectos de inversión	No podrán otorgarse licencias, derechos, autorizaciones, ni cualquier otro título habilitante para el inicio de la ejecución de proyectos de inversión sujetos al SEIA, sin contar con la Certificación Ambiental expedida por la Autoridad Competente.
Perú	Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA	Los proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en el SEIA deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular de los mismos cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder.
Perú	Planes que contienen los estudios ambientales	<p>Los estudios ambientales de Categoría I, deben incluir Plan de Participación Ciudadana, medidas de mitigación, Plan de Seguimiento y Control, Plan de Contingencia, Plan de Cierre o Abandono, entre otros que determine la Autoridad Competente.</p> <p>Los estudios ambientales de Categorías II y III, deben incluir un Plan de Participación Ciudadana; así como un Plan de Manejo Ambiental, Plan de Vigilancia Ambiental, Plan de Contingencias, Plan de Relaciones Comunitarias, Plan de Cierre o Abandono, entre otros que determine la Autoridad Competente, los cuales son parte integrante de la Estrategia de Manejo Ambiental.</p> <p>Las medidas y planes de los estudios ambientales de Categoría I, II y III, están sujetos a actualización cada vez que se realicen cambios o modificaciones que varíen de manera significativa el alcance o posibles impactos del proyecto de inversión materia del estudio ambiental aprobado o en caso que se aprueben nuevas normas que así lo determinen.</p>
Perú	Actualización del Estudio Ambiental	El Estudio Ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares,
Perú	Disposiciones para proyectos de menor escala o particulares	El ente rector y las Autoridades Competentes están facultados para emitir normas y disposiciones especiales para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del SEIA, por titulares de proyectos de menor escala que pudieran localizarse masivamente en una misma área geográfica u otras que por situaciones o circunstancias particulares lo justifiquen, a fin que los instrumentos de gestión ambiental del SEIA y demás exigencias que se derivan del mismo, puedan ser cumplidos por un solo titular o grupo de titulares, siempre que se delimiten claramente las responsabilidades individuales y colectivas, y se determine una Estrategia de Manejo Ambiental que sustente la viabilidad del cumplimiento de las obligaciones que determine la Autoridad Competente.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Impactos sociales en el ámbito del SEIA	Toda referencia al impacto ambiental en el marco del SEIA comprende los impactos sociales que estuvieran relacionados, respecto de los cuales se deben considerar las medidas necesarias de acuerdo a cada proyecto de inversión, de modo que se asegure una gestión social adecuada, la transparencia de los procesos, la prevención de conflictos, así como la prevención, control, mitigación y eventual compensación e indemnización por los impactos sociales que se pudieran generar.
Perú	Clasificación anticipada y Términos de Referencia para proyectos con características comunes	Las Autoridades Competentes podrán emitir normas para clasificar anticipadamente proyectos de inversión y aprobar Términos de Referencia para proyectos que presenten características comunes o similares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley, en cuyo caso los titulares presentarán directamente el estudio ambiental elaborado, para su revisión y aprobación.
Perú	Contenido de la Evaluación Preliminar y los Términos de Referencia del EIA	La Evaluación Preliminar debe contener como mínimo lo establecido en el Anexo VI sin perjuicio de la información adicional que pueda solicitar la Autoridad Competente y debe estar suscrito por el titular y el o los profesionales responsables de su elaboración. Las Autoridades Competentes elaborarán o actualizarán guías específicas para la formulación de Términos de Referencia de los Estudios de Impacto Ambiental relacionados con los proyectos clasificados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36° del presente Reglamento, considerando los contenidos y criterios indicados en los Anexos III y IV. Para las Categorías II y III, el titular deberá presentar una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental correspondiente, para su aprobación.
Perú	Difusión del estudio ambiental	Admitida a trámite la Solicitud de Clasificación de un proyecto de inversión, la Autoridad Competente debe darle difusión procurando establecer espacios y plazos adecuados para que las partes interesadas puedan tomar conocimiento de su contenido y alcanzar a la Autoridad Competente sus observaciones y comentarios, dentro de los plazos establecidos para la evaluación del estudio ambiental correspondiente.
Perú	Evaluación para la clasificación	Una vez admitida a trámite la Solicitud de Clasificación, en un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de su admisión, la Autoridad Competente evaluará el contenido de la solicitud y requerirá, si fuera el caso, mayor información al titular o el levantamiento de las observaciones que formule. El titular debe presentar la información adicional requerida dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la observación; plazo que podría prorrogarse por única vez hasta por diez (10) días hábiles adicionales si el titular así lo solicitara dentro del plazo inicial. Si durante el periodo de evaluación, la autoridad determina que la solicitud presentada no corresponde a la categoría propuesta por el titular del proyecto, deberá reclasificarlo requiriendo al titular la presentación de los Términos de Referencia correspondientes.
Perú	Opiniones técnicas	Para la evaluación de la Solicitud de Clasificación y sin perjuicio de los plazos establecidos, cuando así lo requiera, la Autoridad Competente podrá solicitar la opinión técnica de otras autoridades la misma que se tendrá en consideración al momento de formular la Resolución. En el informe que sustenta la Resolución debe darse cuenta de estas opiniones así como de su acogimiento o de las razones por las cuales no fueron consideradas. En caso que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural protegida o en su correspondiente zona de amortiguamiento, la Autoridad Competente debe solicitar opinión técnica sobre los Términos de Referencia al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. Asimismo, para aquellos proyectos relacionados con el recurso hídrico, se debe solicitar opinión técnica sobre los Términos de Referencia a la Autoridad Nacional del Agua – ANA.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Resolución de Clasificación	En concordancia con los plazos establecidos en el artículo 43º, la Autoridad Competente emitirá una Resolución mediante la cual: - Otorga la Certificación Ambiental en la Categoría I (DIA) o Desaprueba la solicitud, - Asigna la Categoría II ó III al proyecto y aprueba los Términos de Referencia. Asimismo, en la Resolución se indicarán las autoridades que emitirán opinión técnica durante la etapa de evaluación del estudio ambiental.
Perú	Requerimiento técnico sobre el proyecto de inversión	El EIA debe ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad. La Autoridad Competente no admitirá a evaluación un EIA si no se cumple esta condición.
Perú	Suscripción de los estudios ambientales	Los estudios ambientales, anexos y demás documentación complementaria, deben estar suscritos por el titular y los profesionales responsables de su elaboración; asimismo, el estudio ambiental debe ser suscrito por los representantes de la consultora a cargo de su elaboración. Toda la documentación presentada en el marco del SEIA tiene el carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, por lo que el titular, los representantes de la consultora que la elabora, y los demás profesionales que la suscriban son responsables por la veracidad de su contenido.
Perú	Plazos	<p>El proceso de evaluación del EIA-sd se lleva a cabo en un plazo de noventa (90) días hábiles contados a partir del día siguiente de admitida la solicitud de Certificación Ambiental; comprende hasta cuarenta (40) días hábiles para la revisión y evaluación; hasta treinta (30) días hábiles para la subsanación de observaciones a cargo del titular; y hasta veinte (20) días hábiles para la expedición de la Resolución respectiva.</p> <p>El proceso de evaluación del EIA-d se lleva a cabo en un plazo máximo de hasta ciento veinte (120) días hábiles contados a partir del día siguiente de presentada la Solicitud de Certificación Ambiental; comprende hasta setenta (70) días hábiles para la evaluación; hasta treinta (30) días hábiles para la subsanación de observaciones a cargo del titular; y hasta veinte (20) días hábiles para la expedición de la Resolución respectiva.</p> <p>Si las observaciones planteadas al titular del proyecto materia del EIA-sd o EIA-d, no fueran subsanadas en su totalidad por razones sustentadas, la Autoridad Competente, a solicitud de parte y por única vez, podrá extender el plazo máximo del procedimiento, confiriendo hasta veinte (20) días hábiles adicionales, contados a partir del día siguiente del término del plazo anteriormente concedido, para la subsanación de las observaciones correspondientes. Efectuada o no dicha subsanación, la Autoridad Competente emitirá la Certificación Ambiental respectiva de ser el caso, o declarará denegada la solicitud, dándose por concluido el procedimiento administrativo.</p> <p>La realización de audiencias públicas u otros mecanismos de participación ciudadana, se sujeta a los mismos plazos previstos para la revisión y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental.</p> <p>De requerirse opinión técnica previa de otras autoridades, ésta deberá formularse en un plazo no mayor de cuarenta (40) días hábiles para el EIA-sd, el cual comprende hasta treinta (30) días hábiles para la evaluación y hasta diez (10) días hábiles para evaluar la subsanación de observaciones. Para el EIA-d, la opinión técnica deberá formularse en un plazo no mayor de cincuenta (50) días hábiles, el cual comprende hasta cuarenta (40) días hábiles para la evaluación y hasta diez (10) días hábiles para evaluar la subsanación de observaciones; el cómputo de estos plazos no deberá afectar el plazo total establecido para la revisión y evaluación del expediente respectivo.</p> <p>Los plazos señalados en el presente artículo para la evaluación de los EIA-sd y los EIA-d podrán ser ampliados por las Autoridades Competentes por única vez y en no más de treinta (30) días hábiles, con el debido sustento técnico presentado por el titular en función a las necesidades y particularidades de cada caso.</p>



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Opiniones técnicas	<p>Para la evaluación del EIA y cuando la Autoridad Competente lo requiera en la Resolución de Clasificación a que se contrae el artículo 45º, ésta podrá solicitar la opinión técnica de otras autoridades en el proceso de revisión y evaluación del EIA. Para este efecto, se requerirá al titular de la solicitud la presentación de tantas copias del expediente presentado como opiniones se soliciten.</p> <p>La autoridad consultada deberá circunscribir su opinión técnica específicamente a los temas que son de su competencia. La Autoridad Competente considerará todas las opiniones recibidas al momento de formular la Resolución aprobatoria o desaprobatoria de la solicitud; el Informe Técnico precisará las consideraciones para acoger o no las opiniones recibidas.</p> <p>En caso que los proyectos o actividades se localicen al interior de un área natural protegida que esté a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP o en su correspondiente zona de amortiguamiento, la Autoridad Competente deberá solicitar la opinión técnica favorable de dicha autoridad, sin perjuicio de las demás facultades que le corresponden de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en materia de áreas naturales protegidas.</p> <p>Para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, respecto de la gestión del recurso hídrico.</p>
Perú	Emisión de la Resolución	<p>Concluida la revisión y evaluación del EIA, la Autoridad Competente debe emitir la Resolución acompañada de un informe que sustente lo resuelto, el cual es parte integrante de la misma y tiene carácter público. El informe debe comprender como mínimo, lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes (información sobre el titular, el proyecto de inversión y las actuaciones administrativas realizadas). 2. Descripción del proyecto. 3. Resumen de las opiniones técnicas de otras Autoridades Competentes y del proceso de participación ciudadana. 4 Descripción de impactos ambientales significativos y medidas de manejo a adoptar. 5 Resumen de las principales obligaciones que debe cumplir el titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las obligaciones, términos y condiciones establecidos en los planes que conforman el EIA. 6 Conclusiones.
Perú	Resolución aprobatoria	<p>La Resolución que aprueba el EIA constituye la Certificación Ambiental, por lo que faculta al titular para obtener las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución de proyectos de inversión.</p> <p>La Certificación Ambiental obliga al titular a cumplir con todas las obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental. Su incumplimiento está sujeto a sanciones administrativas e incluso puede ser causal de cancelación de la Certificación Ambiental. El otorgamiento de la Certificación Ambiental no exime al titular de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de la ejecución de su proyecto, conforme a ley.</p>
Perú	Resolución desaprobatoria	<p>Si como resultado de la revisión y evaluación del expediente administrativo del EIA, se advirtiera que el Estudio de Impacto Ambiental no ha considerado los Términos de Referencia aprobados, o que los potenciales impactos ambientales negativos derivados del proyecto podrían tener efectos no aceptables u otro aspecto relevante que se identifique, la Autoridad Competente debe emitir una Resolución desaprobatoria que será notificada al titular.</p>



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Inicio de actividades y pérdida de la Certificación Ambiental	Dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al inicio de las obras para la ejecución del proyecto, el titular deberá comunicar el hecho a la Autoridad Competente y ésta a las autoridades en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA. La Certificación Ambiental pierde vigencia si dentro del plazo máximo de tres (3) años posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado por la Autoridad Competente, por única vez y a pedido sustentado del titular, hasta por dos (2) años adicionales. En caso de pérdida de vigencia de la Certificación Ambiental, para el otorgamiento de una nueva Certificación Ambiental el titular deberá presentar el estado ambiental incluyendo las modificaciones correspondientes.
Perú	Modificación, suspensión y cancelación de la Certificación Ambiental	La Autoridad Competente deberá aprobar las normas que regulen las condiciones y procedimientos para la modificación, suspensión y cancelación de la Certificación Ambiental.
Perú	Recursos Impugnativos	Las Resoluciones que aprueben o denieguen la Certificación Ambiental son susceptibles de impugnación en la vía administrativa de acuerdo con lo previsto en la Ley N°27444.
Perú	Carácter público de la información	Toda documentación incluida en el expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental es de carácter público, a excepción de la información expresamente declarada como secreta, reservada o confidencial. En ningún caso se podrá limitar el derecho al acceso a la información pública respecto de documentación relacionada con los impactos, las características o circunstancias que hagan exigible la presentación de un estudio ambiental, ni de aquellas circunstancias que impliquen riesgo o afectación a la salud de las personas o al ambiente.
Perú	Mecanismos de participación ciudadana	Sin perjuicio de los mecanismos específicos que pudiera proponer de acuerdo al caso, el titular del proyecto de inversión o la Autoridad Competente, en los procesos de participación ciudadana formal y no formal se podrán utilizar mecanismos como: publicación de avisos; distribución de Resúmenes Ejecutivos y acceso público al texto completo del estudio ambiental; buzones de observaciones y sugerencias; oficinas de información y participación ciudadana; visitas guiadas; consulta con promotores; mecanismos para canalizar observaciones y sugerencias ante la autoridad; talleres o reuniones informativas; audiencias públicas con participación de intérpretes en lenguas locales, según corresponda; entre otros. La Autoridad Competente establece los mecanismos formales para lograr la efectiva participación ciudadana, a fin de facilitar la difusión de la información y la incorporación de observaciones y opiniones orientadas a mejorar los procesos de toma de decisiones respecto de los estudios ambientales, así como acerca de la participación ciudadana durante la etapa de ejecución de los proyectos.
Perú	Registro de Entidades Autorizadas	El MINAM conduce el Registro de Entidades Autorizadas para elaborar Estudios Ambientales, el mismo que se rige por su propio Reglamento. El titular o proponente debe elaborar el estudio ambiental correspondiente de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, sólo a través de las entidades autorizadas e inscritas en dicho Registro.
Perú	Atención de impactos ambientales no considerados en el Estudio Ambiental	Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones establecidos en el estudio ambiental aprobado, se determinase que los impactos ambientales negativos generados difieren de manera significativa a los declarados en la documentación que propició la Certificación Ambiental, la autoridad en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SEIA requerirá al titular, la adopción de las medidas correctivas o de manejo ambiental que resulten necesarias para mitigar y controlar sus efectos, sin perjuicio de requerir la actualización del estudio ambiental, ante la autoridad competente, en el plazo y condiciones que indique de acuerdo a la legislación vigente. Esta condición no exceptúa la eventual paralización de operaciones o la aplicación de otras sanciones que pudieran corresponder.

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Perú	Vigilancia en el ámbito del SEIA	Están a cargo de la vigilancia, el MINAM respecto del funcionamiento del SEIA y las Autoridades Competentes de acuerdo a sus respectivas funciones y facultades. La vigilancia ciudadana complementa el accionar del Estado.
Perú	Proyectos comprendidos en la EIA	El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de EIA presenta en un anexo los proyectos sujetos a EIA. No se incluye una clasificación por categorías, sino que la categoría que corresponde a cada proyecto particular debe ser determinada utilizando criterios de protección ambiental que se presentan en otro anexo al reglamento.
Perú	Términos de referencia básicos para EIA	El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de EIA presenta en dos anexos los términos de referencia básicos para los EIA semidetallados y detallados.
Perú	Evaluación preliminar	En un anexo al Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de EIA se incluye el contenido mínimo que tiene que tener la evaluación preliminar de proyectos que, en su caso, puede servir como Declaración de Impacto Ambiental de proyectos de Categoría I (de los que se prevén impactos ambientales leves).
Perú	Instrumentos de gestión ambiental presentados en forma colectiva	Los titulares de proyectos de inversión o actividades en curso, de las micro o pequeñas empresas, localizados en una misma área geográfica y que generen impactos similares o acumulativos, podrán solicitar a la autoridad competente, que los instrumentos de gestión ambiental y demás exigencias que se deriven de éstos, puedan ser cumplidos por un grupo de titulares.
Perú	Clasificación anticipada y términos de referencia	Se aprueba la clasificación anticipada de las actividades incluidas (Anexo 2 del Reglamento de Gestión Ambiental). El Ministerio de la Producción (PRODUCE), mediante Resolución Ministerial y previa opinión favorable del MINAM, aprobará los Términos de Referencia para proyectos de la industria manufacturera y de comercio interno que cuenten con clasificación anticipada.
Perú	Autoridades	La Dirección General de Asuntos Ambientales del PRODUCE, es la autoridad ambiental competente para promover y regular la gestión ambiental de las actividades de la industria manufacturera y de comercio interno; y, es la encargada de implementar el presente Reglamento en el marco de las funciones asignadas.
Perú	Adecuación ambiental de las actividades en curso	El titular que viene ejecutando sus actividades sin contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado, debe solicitar a la autoridad competente, en los plazos y condiciones que ésta establezca, la adecuación ambiental de sus actividades en curso, a través de: a) Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y potenciales caracterizados como leves, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso. b) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) Instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales caracterizados como relevantes, generados o identificados en el área de influencia de la actividad en curso. Los términos de referencia de la DAA y el PAMA deben contener como mínimo la descripción de la actividad y de su área de influencia, la identificación y caracterización de los impactos ambientales negativos reales y/o potenciales, las medidas correctivas y permanentes, así como un cronograma de implementación y el presupuesto asignado. El PRODUCE podrá aprobar guías para orientar su adecuada elaboración, previa opinión favorable del MINAM.
Colombia	Términos de referencia para EIA	La autoridad ambiental competente, para otorgar la licencia ambiental, fijará los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental en un término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del interesado".

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Colombia	Procedimiento para Otorgamiento de Licencias Ambientales.	El interesado en el otorgamiento de una licencia ambiental presentará ante la autoridad ambiental competente la solicitud acompañada del estudio de impacto ambiental correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de treinta (30) días hábiles para solicitar al interesado información adicional en caso de requerirse. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de diez (10) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, que deberán serle remitidos en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, dispondrá hasta noventa (90) días hábiles para decidir sobre la licencia ambiental, contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida, según el procedimiento previsto en este artículo. PARÁGRAFO 1o. En caso de que el procedimiento se demore más de los noventa (90) días hábiles establecido en este artículo contados a partir del acto administrativo de trámite que reconozca que ha sido reunida toda la información requerida, se convocará a un comité quien en un plazo menor a diez (10) días hábiles establecerá un plan de acción obligatorio para que en un plazo menor a treinta (30) días hábiles la autoridad ambiental esté en posibilidad de decidir sobre la licencia ambiental.
Colombia	Calidad de los Estudios de Impacto Ambiental	El Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la calidad de la información aportada en procesos de licenciamiento ambiental, establecerá las condiciones y requisitos para las personas naturales o jurídicas que elaboran estudios de impacto ambiental, diagnósticos ambientales de alternativas y planes de manejo ambiental que se presenten ante la autoridad ambiental estén debidamente certificadas de acuerdo al procedimiento que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, establezca.
Colombia	Licencia Ambiental Única.	A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental competente incluirá en la licencia ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad. En los casos en que el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE sea competente para otorgar la licencia ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones relacionados con la obra o actividad para cuya ejecución se pide la licencia, serán otorgados por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, teniendo en cuenta la información técnica suministrada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales correspondientes y demás entidades del Sistema Nacional del Ambiente.
Colombia	Garantía bancaria	En la explotación minera a cielo abierto se exigirá, la restauración o la sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con la explotación por cuenta del concesionario o beneficiario del título minero, quien la garantizará con una póliza de cumplimiento o con garantía bancaria. El Gobierno reglamentará el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o la garantía bancaria.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Colombia	Audiencias Públicas Administrativas sobre Decisiones Ambientales en Trámite.	<p>El Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro, cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los reglamentos, podrán solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad competente para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva. La audiencia de que trata el presente artículo se celebrará con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, bien sea para la expedición, la modificación o la cancelación de un permiso o licencia ambiental. La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual se solicita, mediante edicto, con una anticipación de por lo menos treinta (30) días a la toma de la decisión a debatir. El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el objeto de la audiencia. Será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado. El edicto permanecerá fijado en secretaría por diez (10) días, dentro de los cuales deberá ser publicado en un diario de circulación nacional y en el boletín de la respectiva entidad. En la audiencia pública podrán intervenir un representante de los peticionarios, los interesados, las autoridades competentes, expertos y organizaciones sin ánimo de lucro que hayan registrado con anterioridad escritos pertinentes al debate, y de la misma se levantará un acta. En la audiencia podrán recibirse las informaciones y pruebas que se consideren conducentes. La decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en cuenta las intervenciones y pruebas recogidas durante la audiencia. La celebración de la audiencia suspende los términos del procedimiento administrativo para el otorgamiento de licencias o permisos y se hace sin perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad competente para expedir el acto administrativo correspondiente. También podrá celebrarse una audiencia pública durante la ejecución de una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas ambientales.</p>
Colombia	Comunidades Indígenas y Negras.	La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades.
Colombia	Autoridades ambientales competentes.	<p>Son autoridades competentes para otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán delegar el ejercicio de esta competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberán tener en cuenta especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de tales entidades para ejercer las funciones delegadas. 3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón (1.000.000) de habitantes dentro de su perímetro urbano en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.
Colombia	Concepto y alcance de la licencia ambiental.	La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Colombia	La licencia ambiental frente a otras licencias.	La obtención de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales.
Colombia	Término de la licencia ambiental.	La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación.
Colombia	Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental.	Están sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8° y 9° del decreto que desarrolla la normativa de EIA, que establecen proyectos competencia de la ANLA y de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Colombia	Modificaciones a proyectos	Parágrafo 10 Para los proyectos de hidrocarburos en donde el área de interés de explotación corresponda al área de interés de exploración previamente licenciada, el interesado podrá solicitar la modificación de la licencia de exploración para realizar las actividades de explotación. En este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 4 o del presente decreto.
Colombia	Términos de referencia	Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar.
Colombia	Participación de las comunidades.	Se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso.
Colombia	Objeto del diagnóstico ambiental de alternativas.	El diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico, las características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. Lo anterior, con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.
Colombia	Exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas.	Se señala el tipo de proyectos que requieren un diagnóstico ambiental de alternativas.
Colombia	Contenido básico del diagnóstico ambiental de alternativas.	Se indica el contenido que tiene que tener el diagnóstico ambiental de alternativas.
Colombia	Estudio de impacto ambiental	Se indica el contenido del estudio de impacto ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de perforación exploratoria de hidrocarburos deberá adelantarse sobre el área de interés geológico específico que se declare, siendo necesario incorporar en su alcance, entre otros aspectos, un análisis de la sensibilidad ambiental del área de interés, los corredores de las vías de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de producción y el transporte en carro-tanques y/o líneas de conducción de los fluidos generados.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Colombia	Evaluación del estudio de impacto ambiental.	<p>Una vez realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite: 1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente de manera inmediata procederá a expedir el acto administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental. 2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días hábiles después del acto administrativo de inicio. Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso, la autoridad ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que se considere pertinente. Este será el único escenario para que la autoridad ambiental competente requiera por una sola vez información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en acta. Contra las decisiones adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá el pertinente recurso de reposición, el cual deberá resolverse de plano en la misma reunión, dejando constancia en el acta.</p> <p>El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud del interesado. En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue información diferente a la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera posterior a la inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de la solicitud de licencia ambiental.</p> <p>Allegada la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de treinta (30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida toda la información requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada y publicada en el boletín de la autoridad ambiental. Cuando el estudio de impacto ambiental (EIA) no cumpla con los requisitos mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales, la autoridad ambiental mediante acto administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud. El interesado en el proyecto a licenciar, deberá informar a la autoridad ambiental sobre la superposición,</p>
Colombia	Superposición de proyectos.	<p>La autoridad ambiental competente podrá otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos licenciados, siempre y cuando el interesado en el proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir e identifique además, el manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el área superpuesta.</p>



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.

País	Aspecto	Requisito legal
Colombia	Modificación de la licencia ambiental.	<p>La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciataria para que ajuste tales estudios. 7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el artículo 25. <p>Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días hábiles.</p> <p>El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes.</p>
Colombia	Cesión total o parcial de la licencia ambiental.	El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.
Colombia	Integración de licencias ambientales.	La licencia ambiental de un proyecto, obra o actividad podrá ser modificada para integrarla con otras licencias ambientales, siempre y cuando el objeto de los proyectos a integrar sea el mismo, sus áreas sean lindantes y se hubieren podido adelantar en un mismo trámite.
Colombia	Pérdida de vigencia de la licencia ambiental.	La autoridad ambiental competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la construcción del proyecto, obra o actividad.
Colombia	Control y seguimiento	La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la autoridad ambiental competente.

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Colombia	Desmantelamiento y abandono.	Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación, un estudio (se indica el contenido del estudio). La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final. Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada dicha fase.
Colombia	Cobro del servicio de seguimiento ambiental.	La tarifa para el cobro del servicio de seguimiento de las licencias ambientales y de los planes de manejo ambiental, se fijará de conformidad con el sistema y método de cálculo señalado en la normativa vigente para el caso, y los dineros recaudados por este concepto solamente se podrán destinar para el cumplimiento cabal de dicha función.
Colombia	Delegación entre autoridades ambientales.	Las autoridades ambientales podrán delegar la función del seguimiento ambiental de las licencias ambientales y de los planes de manejo ambiental en otras autoridades ambientales mediante la celebración de convenios interadministrativos.
Colombia	Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea	La Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) es un sistema centralizado de cobertura nacional través del cual se direccionan y unifican todos los trámites administrativos de licencia ambiental, planes de manejo ambiental, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, así como la información de todos los actores que participan de una u otra forma en el mismo, lo cual permite mejorar la eficiencia y eficacia de la capacidad institucional en aras del cumplimiento de los fines esenciales de Estado.
Colombia	Registro Único Ambiental (RUA).	El Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, adoptará mediante acto administrativo los Protocolos para el Monitoreo y Seguimiento del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables a cargo de IDEAM para los diferentes sectores productivos, cuya herramienta de captura y de salida de información es el Registro Único Ambiental (RUA). En la medida en que se vayan adoptando los protocolos para cada sector, los titulares de licencias o planes de manejo ambiental informarán periódicamente el estado de cumplimiento ambiental de sus actividades a través del RUA.
Colombia	Información ambiental para la toma de decisiones.	El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), deberá tener disponible la información ambiental para la toma de decisiones y que haya sido generada como parte de los estudios y de las actividades de evaluación y seguimiento dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Las autoridades ambientales deberán proporcionar de manera periódica la información que sobre el asunto reciban o generen por sí mismas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el IDEAM. El IDEAM Y la ANLA buscarán los mecanismos para gestionar y contar con información regional o información de línea base suficiente para establecer una zonificación ambiental, debidamente validada y actualizada; La ANLA deberá poner a disposición de los usuarios esta información en su portal web o por medio del portal SIAC.
Colombia	Acceso a la información.	Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Colombia	Declaración de estado del trámite.	Cualquier persona podrá solicitar información sobre el estado del trámite de un proyecto, obra o actividad sujeto a licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente, quien expedirá constancia del estado en que se encuentra el trámite.
Ecuador	Competencias en licencias y evaluación de impacto	Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional: ... - Ejercer la potestad pública de evaluación, prevención, control y sanción en materia ambiental, según los procedimientos establecidos en este Libro y la legislación aplicable; - Emitir los permisos ambientales que le son asignadas de acuerdo a las disposiciones establecidas en la legislación de la materia regulada en este Libro; ...
Ecuador	Actividades sujetas a evaluación de impacto	Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental,
Ecuador	Competencia de evaluación de impacto ambiental	Le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual podrá ser delegado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o municipales a través de un proceso de acreditación conforme a lo establecido en este Libro. El resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales es una autorización administrativa ambiental cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión utilizada según el caso.
Ecuador	Competencia en el control y seguimiento.-	La Autoridad Ambiental Nacional es competente para gestionar los procesos relacionados con el control y seguimiento de la contaminación ambiental, de los proyectos obras o actividades que se desarrollan en el Ecuador; esta facultad puede ser delegada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales, que conforme a la ley están facultados para acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la acreditación.
Ecuador	Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional	El permiso ambiental de cualquier naturaleza corresponde exclusivamente a la Autoridad Ambiental Nacional, en los siguientes casos: a) Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el Presidente de la República; así como proyectos de prioridad nacional o emblemáticos, de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad Ambiental Nacional; b) Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles con su respectiva zona de amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosistemas frágiles y amenazados; c) Aquellos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, que supongan alto riesgo e impacto ambiental definidos por la Autoridad Ambiental Nacional; y, d) En todos los casos en los que no exista una Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. La gestión ambiental de proyectos, obras o actividades que pertenezcan a estos sectores, en lo relativo a la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, podrá ser delegada a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsables y en casos específicos, mediante resolución de la Autoridad Ambiental Nacional.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Autoridades ambientales competentes	<p>1) Competencia a nivel de organizaciones de gobierno:</p> <p>a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varias juntas parroquiales, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de estar acreditado; caso contrario le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado o en su defecto, a la Autoridad Ambiental Nacional;</p> <p>b) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por el mismo o por más de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado; caso contrario le corresponderá a la Autoridad Ambiental Nacional;</p> <p>c) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por uno o varios Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, la Autoridad Ambiental Nacional será la competente para hacerse cargo del proceso.</p> <p>2) Competencia a nivel de personas naturales o jurídicas no gubernamentales:</p> <p>a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido a nivel cantonal, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal si aquel está acreditado; caso contrario, le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial acreditado; caso contrario, le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional;</p> <p>b) En las zonas no delimitadas, la Autoridad Ambiental Competente será la que se encuentre más cercana al proyecto, obra o actividad, de estar acreditada; caso contrario, le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional;</p> <p>c) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción municipal, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial siempre que esté acreditado; caso contrario le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional;</p> <p>d) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción municipal y provincial, la Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional;</p> <p>e) Cuando el proyecto, obra o actividad, involucre a más de una circunscripción provincial, la Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional.</p>
Ecuador	Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).-	Es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental. El objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental mediante el sistema SUIA es prestar un servicio informático ambiental de calidad a los promotores de proyectos, obras o actividades, para los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental de una manera eficiente, así como la recopilación, evaluación y uso de la información institucional.
Ecuador	Regularización del proyecto, obra o actividad	Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.
Ecuador	Pago por servicios administrativos.-	Los pagos por servicios administrativos son valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o actividad a la Autoridad Ambiental Competente, por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, licencias u otros de similar naturaleza

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Modificación del proyecto, obra o actividad	<p>Todo proyecto, obra o actividad que cuente con un permiso ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los siguientes casos:</p> <p>a) Por sí sola, la modificación constituya un nuevo proyecto, obra o actividad;</p> <p>b) Cuando los cambios en su actividad, impliquen impactos y riesgos ambientales que no hayan sido incluidas en la autorización administrativa ambiental correspondiente;</p> <p>c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o se ubique en otro sector.</p>
Ecuador	Incorporación de actividades complementarias	<p>En caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad.</p> <p>En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental.</p>
Ecuador	Cambio de titular del permiso ambiental	En el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente.
Ecuador	Certificado ambiental	Será otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, sin ser de carácter obligatorio, a los proyectos, obras o actividades considerados de mínimo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el certificado ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado,
Ecuador	Registro Ambiental	Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.
Ecuador	Licencia Ambiental	Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.
Ecuador	Cláusula especial	<p>Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente.</p> <p>En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente.</p>
Ecuador	Acceso a la información.	Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento ambiental.

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Calificación de consultores	Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.
Ecuador	Términos de referencia	Son documentos preliminares estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.
Ecuador	Análisis de alternativas	En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis.
Ecuador	Plan de Manejo Ambiental	El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluya adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso.
Ecuador	Estudios Ambientales Ex Ante y Ex Post	El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA Ex Ante).- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. Los Estudios Ambientales Ex Post son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento.
Ecuador	Observaciones a los estudios ambientales	La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado.

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.-	La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Ecuador	Emisión de los permisos ambientales.	Los proyectos, obras o actividades que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental.
Ecuador	Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post)	Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial.
Ecuador	Registro de los permisos ambientales	La Autoridad Ambiental Nacional llevará un registro de los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del SUIA.
Ecuador	Cierre de operaciones y abandono del área o proyecto	Los Sujetos de Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.
Ecuador	Participación social	La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.
Ecuador	Mecanismos de participación	Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación.
Ecuador	Momentos de la participación	La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Mecanismos de control	El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos: a) Monitoreos b) Muestreos c) Inspecciones d) Informes ambientales de cumplimiento e) Auditorías Ambientales f) Vigilancia ciudadana g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga
Ecuador	Actividades con impacto ambiental acumulativo	La Autoridad Ambiental Competente, en coordinación con las instituciones involucradas, evaluarán los impactos ambientales generados por actividades o fuentes no significativas que puedan tener efectos acumulativos, para lo cual deberán elaborar estudios o monitoreos de calidad de los recursos en cuestión.
Ecuador	Plan de Manejo Ambiental	Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental que ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al Sujeto de Control que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso ambiental, deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente un reporte de los muestreos que permitan la caracterización ambiental de los aspectos físicos, químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados podrá disponer al sujeto de control la ejecución de medidas de prevención, mitigación y/o rehabilitación.
Ecuador	Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental y actividades de monitoreo, seguimiento y control para proyectos que cuenten con Licencia Ambiental	De existir razones técnicas suficientes, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al regulado en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental aprobado. El regulado deberá informar por escrito a la entidad correspondiente para la ejecución de la actividad, cuando se presenten modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprobó el Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que produzca variaciones en la información suministrada. La Autoridad Ambiental Competente emitirá el respectivo informe para determinar la acción que el regulado deberá efectuar, misma que deberá responder a los cambios ocurridos. Entre las acciones que el regulado deberá efectuar se citan las siguientes: a) Modificación del plan de monitoreo y seguimiento a los aspectos ambientales significativos de la actividad; b) Actualización del Plan de Manejo Ambiental; y, c) Ejecución inmediata de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con la respectiva actualización del Plan de Manejo Ambiental.
Ecuador	Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de monitoreo	Los requerimientos de monitoreo estarán establecidos en los Planes de Manejo Ambiental, condicionantes de las Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad ambiental competente durante la revisión de los mecanismos de control y seguimiento ambiental.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Muestreo	Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas establecidas para el efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren acreditados ante el organismo competente. Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades para el efecto, así como los datos de la materia prima, y los productos químicos utilizados, entre otros, para que el personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales.
Ecuador	Plan Emergente	Es un conjunto de acciones programadas para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada, que no se encuentren contemplados en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, el cual deberá ser presentado por el Sujeto de Control dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los eventos o cuando la Autoridad Ambiental Competente así lo requiera.
Ecuador	Informes Ambientales de cumplimiento	Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.
Ecuador	Periodicidad y revisión	Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.
Ecuador	Auditoría Ambiental	Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada.
Ecuador	Objetivos de la auditoría ambiental	Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los siguientes: a) Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la legislación ambiental vigente; b) Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada; y, c) Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en la operación.
Ecuador	Términos de referencia de Auditoría Ambiental	El Sujeto de Control, previamente a la realización de las auditorías ambientales, deberá presentar los correspondientes términos de referencia para la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente. En los términos de referencia se determinará y focalizará el alcance de la auditoría ambiental, según sea el caso.



Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento	Sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimiento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.
Ecuador	Planes de acción de auditorías ambientales	De identificarse durante las auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes para su corrección y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con los respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para corregir los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las actividades de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan.
Ecuador	Revisión de auditorías ambientales de cumplimiento	La Autoridad Ambiental Competente una vez que analice la documentación e información remitida por el Sujeto de Control, deberá aprobar, observar o rechazar el informe de auditoría. En caso de que existan observaciones al informe de auditoría, estas deberán ser notificadas al promotor, quien deberá absolverlas en el término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación. En caso de aprobación de auditorías ambientales, el Sujeto de Control deberá obligarse a la aplicación de las medidas ambientales que se encuentran incluidas en el cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental modificado, con la correspondiente actualización de la garantía o póliza de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental respectiva de ser el caso. Previamente a la aprobación de las auditorías ambientales de cumplimiento, los Sujetos de Control deberán cancelar los valores por servicios administrativos para aprobación del informe de auditoría así como para el control y seguimiento del periodo siguiente a ser auditado.
Ecuador	No conformidades	La normativa establece una gradación de los hallazgos en cuatro clases: observación, conformidad, no conformidad menor y no conformidad mayor. Los hallazgos que no correspondan con los descritos explícitamente en la normativa, se clasificarán en no conformidad menor o mayor en función de aspectos relacionados con el impacto ambiental producido.
Ecuador	Los no regulados	Las actividades que no se encuentren reguladas, deberán iniciar su proceso de regularización, mediante el trámite respectivo. Sin perjuicio de lo antes expuesto, los Sujetos de Control que no se encuentren regulados y presenten incumplimientos de las normas técnicas ambientales, la Autoridad Ambiental Competente impondrá una multa que dependiendo de la gravedad de la contaminación o deterioro ocasionados, será fijada entre veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones básicas unificadas, sin perjuicio de las acciones civiles o penales y la responsabilidad por la reparación ambiental a que haya lugar.
Ecuador	Acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental	Para la acreditación ante el SUMA, se deberá presentar a la Autoridad Ambiental Nacional una solicitud firmada por la máxima autoridad del Gobierno autónomo descentralizado provincial, metropolitano y/o municipal, en la que se expresará la voluntad de acreditarse como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en su circunscripción, debiendo especificar los sectores en los cuales aspira tener competencia ambiental. La solicitud de acreditación incorporará documentación que certifique el cumplimiento de determinados requisitos en las siguientes materias: aspectos institucionales, jurídicos, económicos, de talento humano, técnicos, tecnológicos y administrativos.

Tabla 3. Prácticas en licenciamiento ambiental identificadas en países del entorno de Bolivia.		
País	Aspecto	Requisito legal
Ecuador	Procedimiento de las auditorías de gestión	La Autoridad Ambiental Nacional realizará auditorías de gestión cuando lo crea conveniente. La Autoridad Ambiental Nacional podrá suspender la acreditación otorgada a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en determinadas circunstancias.
Ecuador	Facilitadores	Son profesionales acreditados y calificados por la Autoridad competente para la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de los Procesos de Participación Social. Solamente aquellos facilitadores acreditados y calificados estarán habilitados para la facilitación de procesos de participación social. La Autoridad competente expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los requisitos y condiciones para la obtención de la acreditación y registro.
Ecuador	Consultores y consultoras ambientales	Son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras acreditadas, calificadas y registradas por la Autoridad competente que presten sus servicios en la elaboración de estudios de impacto ambiental; declaraciones de impacto ambiental, planes de manejo y auditorías ambientales.

17. Propuesta de lineamientos para el licenciamiento ambiental

Se considera que las soluciones propuestas son adecuadas al tipo de problemática que se aborda ya que son el tipo de soluciones que se adoptan en muchos países de diverso grado de desarrollo y complejidad para estos problemas. Gran parte de las propuestas requerirán de modificaciones legales, pero no demasiado complejas ni para las que sea necesario un gran consenso político, pues se trata de medidas de carácter relativamente técnico.

Los lineamientos se presentan siguiendo un orden análogo al utilizado en la parte anterior del informe para presentar los hallazgos del análisis del proceso de licenciamiento ambiental realizado. En cada propuesta se ha presenta la formulación del lineamiento propuesto, el hallazgo con el que se relaciona, una descripción de los beneficios que reportaría la adopción de la propuesta, y acciones que se proponen para poner en marcha el lineamiento.

17.1. Estructura institucional y análisis de competencias

1. *Lineamiento: Reorganizar las competencias en materia de licenciamiento ambiental reforzando el papel de los Departamentos, transfiriendo actividades y competencias de la autoridad competente*

nacional a los departamentos, de los departamentos a los municipios grandes¹³ y del resto de los municipios a los departamentos.

Hallazgo:

Aunque la normativa existente asigna responsabilidades importantes en el licenciamiento a Departamentos y Municipios, en la práctica no las están ejerciendo de forma plena, sino que es el organismo competente nacional quien asume gran parte del trabajo. En parte, esto se debe a que Departamentos y Municipios no tienen suficientes medios y capacitación. Esto se traduce en una excesiva dedicación de los recursos humanos del Ministerio a la tarea de otorgamiento de licencias ambientales. Por otro lado, se da una duplicación de esfuerzos entre organismos sectoriales, municipios, departamentos y ministerio en la revisión de documentación relacionada con la solicitud de licencias (revisión del formulario de FA, EEIA, y el MA).

Por otro lado, la práctica existente en Bolivia de regular aspectos ambientales de manera sectorial puede dar lugar a que un determinado sector aborde temas que en principio debieran ser de aplicación general. Por ejemplo, la elaboración de normativa sobre residuos dentro de la normativa sectorial, o la de límites máximos permisibles para suelos¹⁴. Esta práctica puede dar lugar a una fragmentación elevada de esta normativa ambiental de residuos, que en principio debiera ser de aplicación general. La normativa y a diferentes criterios, o a un coste más elevado de la elaboración de normas para mantener su coherencia.

Beneficios:

La concentración de responsabilidades en los Departamentos y en los municipios grandes permitirá que el otorgamiento de licencias a las actividades, y su control, sea realizado por estructuras administrativas que están geográficamente relativamente cerca de las actividades, y que tienen una dimensión tal que podrán asumir en el futuro esta tarea con personal suficiente y competente, si se las dota adecuadamente. En cambio, otras estructuras administrativas cercanas a las actividades pero de dimensión pequeña, como los municipios pequeños o las comunidades indígenas originarias, en la gran mayoría de los casos no tendrán dimensión suficiente ni el número de actividades que se establezcan en ellas será suficiente para justificar que se doten de las capacidades y los recursos como para gestionar este tipo de responsabilidades. El Ministerio podrá seguir realizando el licenciamiento de proyectos de Categoría 1, pues no son muy numerosos (Ver Tabla 1). Sin embargo,

¹³ Habría que definir qué tamaño sería el adecuado para que los municipios tengan recursos como para asumir esa responsabilidad. Por ejemplo, en Ecuador la normativa de Ecuador se menciona 1.000.000 habitantes.

¹⁴ Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos



el seguimiento de estas actividades será más fácil para los Departamentos que para el Ministerio, por su mayor proximidad en general a las actividades.

Los organismos sectoriales tienen un conocimiento técnico elevado y, a lo largo de los años de aplicación de la normativa actualmente vigente, se han dotado de capacidades en materia ambiental. Sin embargo, su prioridad principal será la de realizar la función sectorial que tienen encomendada, y la protección ambiental es un aspecto limitante a considerar, y algo que deben interiorizar y asumir, pero una responsabilidad más, pero no la principal. Sin embargo, el Ministerio responsable del Medio Ambiente y las áreas responsables del medio ambiente en los Departamentos tienen como función principal y única la protección ambiental.

Los sectores seguirán aportando su conocimiento técnico en comentarios a los informes y documentos durante la revisión de los mismos en el proceso de otorgamiento de licencias. El establecimiento de límites permisibles de emisiones de actividades sectoriales debiera ser competencia del Ministerio responsable de medio ambiente.

Propuesta:

Se propone una reorganización de competencias con énfasis en el Ministerio competente en medio ambiente para actividades grandes, y departamentos y municipios grandes para intermedias. Se propone limitar al máximo posible la participación de los municipios pequeños y de otros niveles competenciales en el otorgamiento de licencias. Se propone un régimen transitorio en el que las competencias se ejecuten en la práctica por quienes tengan los recursos, que se extendería hasta que los departamentos y los municipios grandes contaran con suficiente capacitación para asumir sus responsabilidades. La Ley 31, Marco de Autonomías y Descentralización, establece en su artículo 88, párrafo III, numeral 2, que la competencia exclusiva en los regímenes de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental es del Estado. En el caso de que se desee que los Departamentos y municipios grandes asuman competencias adicionales, se deberán establecer los mecanismos legales necesarios, por ejemplo, suscribir convenios intergubernativos.

El papel de los organismos sectoriales sería el de colaborar aportando su conocimiento técnico especializado a las labores de inspección. Esto puede hacerse por diversas vías, por ejemplo, elaborando guías, formando al personal de inspección de otros organismos. En el caso de que se considere necesario que técnicos de organismos sectoriales participen en visitas de inspección porque la materia a analizar no es fácilmente trasladable en guías o con formación podrán hacerlo. Los técnicos de departamentos con conocimiento técnico o científico especializado en ciertas materias como arqueología u otros, podrían participar en labores de inspección siguiendo el modelo descrito para los organismos sectoriales.

Los aspectos relativos a seguridad y salud laboral o a seguridad industrial son materias diferentes a las medioambientales, y la responsabilidad en esas materias habitualmente recae en Ministerios

distintos al que es competente en medio ambiente. Por ejemplo, las de seguridad y salud laboral suelen recaer en ministerios competentes en materia de trabajo, y los de seguridad industrial en ministerios competentes en industria. Se recomienda que estos aspectos no se incluyan como requerimiento en las solicitudes de licencia ambiental (por ejemplo, ni en la Ficha Ambiental, ni en el Manifiesto Ambiental, ni en los EEIA), ni en los requisitos a revisar en el seguimiento y control medioambiental posterior a la licencia. Las razones son que los conocimientos en estas materias (seguridad y salud, seguridad industria y medio ambiente) son muy específicos, pero muy diferentes, y la normativa que los regula también. Asimismo, los técnicos que conocen materias de medio ambiente frecuentemente no son especialistas en materia de seguridad industrial o en seguridad y salud laboral, y viceversa.

En la siguiente tabla, se propone un posible esquema de reparto de competencias.

Tabla 4. Propuesta de reparto de competencias y responsabilidades en materia de licenciamiento ambiental			
Categoría de actividad	Actividad a desarrollar	Organismo competente	Papel de organismos sectoriales, departamentos, municipios, otros organismos
Categoría 1 (sujeta a EIA)	Otorgamiento de licencia ambiental	Ministerio	Municipios: aportar información sobre planeamiento y normas ambientales municipales Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico y comentarios basados en ese conocimiento técnico dirigidos a proteger el medio ambiente Departamentos: aportar información y comentarios sobre zonas sensibles o protegidas, y otros aspectos
Categoría 2 (sujeta a EIA analítico específico) con efectos transfronterizos, ubicados en más de un departamento, que se encuentre en un área protegida, o cuya inversión sea importante (magnitud a definir, p.ej. 500 millones de bolivianos)	Otorgamiento de licencia ambiental	Ministerio	Municipios: aportar información sobre planeamiento y normas ambientales municipales Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico y comentarios basados en ese conocimiento técnico dirigidos a proteger el medio ambiente Departamentos: aportar información y comentarios sobre zonas sensibles o protegidas, y otros aspectos
Categoría 2 (sujeta a EIA analítico específico), resto de proyectos no incluidos en el anterior	Otorgamiento de licencia ambiental	Departamento	Municipios: aportar información sobre planeamiento y normas ambientales municipales Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico y comentarios basados en ese conocimiento técnico dirigidos a proteger el medio ambiente Ministerio: aportar criterios estandarizados, metodologías, medidas correctivas o preventivas estándar.
Categoría 3 (sujetas a medidas de Mitigación y a Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental).	Otorgamiento de licencia ambiental	Departamento/ Municipios grandes	Municipios: aportar información sobre planeamiento y normas ambientales municipales Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico y comentarios basados en ese conocimiento técnico dirigidos a proteger el medio ambiente Ministerio: aportar criterios estandarizados, metodologías, medidas correctivas o preventivas estándar.

Tabla 4. Propuesta de reparto de competencias y responsabilidades en materia de licenciamiento ambiental

Categoría 4 (sujetas a registro)	Registro de la actividad	Municipio	Departamento: recopilar información de los registros municipales para crear un registro departamental
Todas	Definición de metodologías, criterios, políticas, planes, objetivos,	Ministerio	

Tabla 5. Propuesta de reparto de competencias y responsabilidades en materia de control de las actividades y de la calidad ambiental

Categoría de actividad	Actividad a desarrollar	Organismo competente	Papel de organismos sectoriales, departamentos, municipios, otros organismos
Categoría 1 (sujeta a EIA)	Control y seguimiento	Departamento (durante un período transitorio el Ministerio)	Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico Realizar sus inspecciones reglamentarias en materias técnicas del sector concreto (no necesariamente relacionadas con cuestiones ambientales).
Categoría 2 (sujeta a EIA analítico específico) con efectos transfronterizos, ubicados en más de un departamento, que se encuentre en un área protegida, o cuya inversión sea importante (magnitud a definir, p.ej. 500 millones de bolivianos)	Control y seguimiento	Departamento (durante un período transitorio el Ministerio)	Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico Realizar sus inspecciones reglamentarias en materias técnicas del sector concreto (no necesariamente relacionadas con cuestiones ambientales).
Categoría 2 (sujeta a EIA analítico específico), resto de proyectos no incluidos en el anterior	Control y seguimiento	Departamento	Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico Realizar sus inspecciones reglamentarias en materias técnicas del sector concreto (no necesariamente relacionadas con cuestiones ambientales).
Categoría 3 (sujetas a medidas de Mitigación y a Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental).	Control y seguimiento	Departamento / Municipios grandes	Organismos sectoriales: aportar conocimiento técnico Realizar sus inspecciones reglamentarias en materias técnicas del sector concreto (no necesariamente relacionadas con cuestiones ambientales).
Categoría 4 (sujetas a registro)	Requiere control aleatorio	Municipios	
Todas	Definición de metodologías, criterios, políticas, planes, objetivos,	Ministerio	Organismos sectoriales: aportar conocimiento del sector Departamentos / Municipios: aportar conocimiento local
Período transitorio (mientras los Departamentos y Municipios se dotan de capacidades y recursos)			
Categorías 1 y 2	Control y seguimiento Capacitación de Departamentos y Municipios	Ministerio Departamentos y Municipios asisten para capacitarse	Organismos sectoriales: aportar conocimiento del sector

Aunque en términos generales la autoridad que otorga la licencia a las actividades es la que realiza el control, el departamento, o los grandes municipios, estarán en general más próximos a las actividades, y podría realizar por delegación del Ministerio las actividades de control. Por tanto se podría tender a esta situación aunque durante un período transitorio fuera el Ministerio quien ejerciera esa labor de control. En el caso de que fuera necesario sancionar, podría ser el Ministerio quien incoara el expediente sancionador.

Acciones propuestas:

Tabla 6. Acciones propuestas para poner en práctica el Lineamiento						
Acción		Responsable	2017	2018	2019	2020
Generación de conocimiento						
1	Definición explícita de criterios, metodologías	Ministerio Colaboran: Organismos Sectoriales	■	■	■	■
2	Elaboración de guías para elaboración y revisión de los distintos documentos necesarios en el proceso de licenciamiento ambiental	Organismos Sectoriales Colabora: Ministerio	■	■		
Cambio legal						
3	Definir los cambios a realizar (categorización de actividades, concreción de responsabilidades, modificaciones al procedimiento,...)	Ministerio Colaboran: Organismos Sectoriales	■			
4	Promover la modificación de la normativa que incorpore las modificaciones adoptadas	Ministerio	■			
Capacitación						
5	Dotarse de personal suficiente	Departamentos / Municipios grandes	■	■		
6	Formar al nuevo personal incorporado a los Departamentos	Ministerio Colaboran: Organismos sectoriales	■	■	■	
7	Apoyar y supervisar al personal de los Departamentos y municipios grandes hasta su capacitación completa	Ministerio	■	■	■	
Acciones del período transitorio						
8	Continuar realizando licenciamiento e inspección de actividades de categoría 2 y 3	Ministerio y Organismos Sectoriales	■	■	■	

17.2. Instrumentos de regulación

2. *Lineamiento: Mejorar la relación entre el sistema de licenciamiento ambiental y el mantenimiento de la calidad ambiental y la implementación de políticas ambientales. Utilizar los instrumentos del licenciamiento ambiental para mejorar la calidad ambiental de zonas degradadas, mantener la calidad de zonas protegidas y para implantar políticas especiales en materia ambiental.*

Hallazgo:

El sistema de licenciamiento ambiental no ha repercutido de manera determinante en la mejora de la calidad ambiental.

Beneficios:

El sistema de licenciamiento ambiental va dirigido a la protección de la calidad ambiental mediante el establecimiento de medidas de prevención y mitigación, límites de emisión, sistemas de monitoreo y control, o, eventualmente, sanciones (ver más adelante). Las directrices políticas específicas de protección ambiental pueden trasladarse al sistema de licenciamiento, por ejemplo, extendiendo el sistema a aquellas actividades que aún no han entrado en él, es decir, legalizando actividades ilegales, y estableciendo medidas especiales de protección ambiental en zonas protegidas o en zonas ya muy degradadas desde el punto de vista ambiental (mediante la legalización de actividades no legalizadas, vía los condicionamientos en las nuevas licencias, o mediante un mayor seguimiento y control de las actividades existentes). También, en la definición del alcance de los estudios de impacto ambiental se puede incluir un punto que exija al promotor que realice un análisis de la normativa ambiental, y de las políticas ambientales, de las consecuencias que éstas tendrán para la actividad que desea iniciar, y de las medidas específicas que plantea para incorporar a su proyecto las directrices de las políticas ambientales y los requisitos de la normativa (ver más adelante propuestas en este sentido).

Acciones propuestas: (Ver también más adelante lineamiento relacionado con la inspección y monitoreo de actividades).

Tabla 7. Acciones propuestas para poner en práctica el Lineamiento					
Acción	Responsable	2017	2018	2019	2020
Generación de conocimiento					
1 Mejorar la obtención de datos de calidad ambiental, particularmente de aguas: - Promover los sistemas de certificación y acreditación de laboratorios - Solicitar a actividades la	Ministerio	██████	██████	██████	██████

Tabla 7. Acciones propuestas para poner en práctica el Lineamiento						
Acción		Responsable	2017	2018	2019	2020
	obtención de muestras y la remisión de informes periódicos al Ministerio competente en medio ambiente - Promover el almacenamiento en soporte GIS de la información sobre calidad ambiental					
2	Clasificar los cuerpos de aguas superficiales	Gobernaciones y municipios	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
3	Aprobar la clasificación los cuerpos de aguas superficiales	Ministerio	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Cambio legal						
4	Identificar los aspectos normativos de la normativa sectorial que debieran ser incorporados a la normativa general	Ministerio Colaboran: organismos sectoriales	■■■■■			
5	Promover el cambio legal que traslade a la normativa de aplicación general aspectos deseables regulados en normativas sectoriales	Ministerio Colaboran: Organismos Sectoriales	■■■■■			
Incorporación de políticas ambientales al licenciamiento						
6	Identificar aspectos de políticas ambientales susceptibles de ser trasladados a los condicionamientos de las licencias ambientales, para su consideración en las futuras licencias	Ministerio Colaboran: Organismos Sectoriales	■■■■■			
7	Incorporación en los condicionados de las licencias de los aspectos que reflejen las políticas ambientales que se desean perseguir	Ministerio	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Un ejemplo de normativa sectorial que podría aplicarse a la normativa general es el de que una actividad que vaya a instalarse en un emplazamiento que tenga licencia ambiental para esa actividad no necesitará realizar el EEIA, sino únicamente un Plan de Manejo Ambiental. Esta iniciativa implica aplicar el mecanismo desarrollado en el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero a todos los sectores. Podría permitir que si en una zona se ha planificado un uso productivo determinado, se ha evaluado el tamaño y número de actividades de ese uso que se podrían autorizar, se ha realizado un EEIA para ese uso, incluido el análisis del impacto ambiental acumulado para todas las actividades admisibles, y se han definido las medidas de prevención y mitigación que las actividades deberían implantar, las actividades podrían implantarse sin necesidad de realizar un EEIA, y únicamente presentando un PMA. Este mecanismo podría ser muy útil en proyectos que tienden a ocupar mucho territorio y a presentarse de forma agrupada, como los de los sectores de minería, hidrocarburos, agrícola, forestal o residencial.

3. *Lineamiento: Adoptar metodologías para la realizar la Evaluación Ambiental Estratégica de planes, políticas y programas para evaluar el impacto ambiental de éstos y metodologías de evaluación de efectos ambientales acumulativos.*

Hallazgo:

En la actualidad no se dispone de criterios adecuados para definir el alcance que debiera tener una Evaluación Ambiental Estratégica de Planes, políticas y programas, y la actual Ficha Ambiental no es un instrumento adecuado para usarlo como base para ello. El análisis de los efectos acumulados de un grupo de proyectos individuales no se realiza de forma adecuada.

Beneficios:

La planificación espacial permite ordenar el uso del territorio, de forma que el desarrollo se realce de forma más eficiente y eficaz. Si previamente a la decisión de aprobar el planeamiento, y durante la fase de diseño del planeamiento, se realiza un análisis estratégico del impacto ambiental de los usos previstos en el planeamiento, se pueden analizar los efectos ambientales acumulados que podrán darse, definir medidas de prevención y mitigación, establecer límites al número, tipo y dimensión de las actividades a establecerse en cada zona y, en definitiva, se puede reducir de forma importante el efecto ambiental de las actividades. Todo ello con el fin de analizar los efectos acumulados de las actividades con un instrumento apropiado, como es la Evaluación Ambiental Estratégica. De la misma forma, si previamente a la adopción de políticas públicas se realiza una Evaluación Ambiental Estratégica de los efectos ambientales que éstas previsiblemente pueden tener, se pueden definir medidas para mitigar estos efectos.

Acciones propuestas:

Tabla 8. Acciones propuestas para poner en práctica el Lineamiento						
Acción		Responsable	2017	2018	2019	2020
Generación de conocimiento						
1	Definir o adoptar metodologías para la realización de la Evaluación Ambiental, Adoptar metodologías apropiadas al tipo y la escala del riesgo ambiental para la evaluación del impacto ambiental acumulado de múltiples proyectos en la misma zona.	Ministerio Colaboran: Gobernaciones y Organismos Sectoriales	■	■		
2	Elaborar guías para la realización de estas evaluaciones que contengan los requisitos mínimos a exigir por el órgano ambiental	Ministerio Colaboran: Gobernaciones y Organismos Sectoriales		■	■	
3	Formar en estas materias al personal funcionario de los órganos competentes y a los consultores privados.	Ministerio		■	■	



4. *Lineamiento: Dotar de flexibilidad al proceso de licenciamiento ambiental: En el caso de proyectos que pueden ocupar un espacio amplio, y en los que, como es el caso de los campos petrolíferos, la localización exacta de las actividades concretas no se conoce, pero sí se conoce su impacto, utilizar el EEIA junto con un buen análisis de la línea base ambiental, para otorgar licencias que permitan una flexibilidad al promotor de modificar su proyecto sin necesidad de tener que obtener una nueva licencia ambiental.*

Hallazgo:

En el proceso de otorgamiento de licencias se dan casos especiales en los que en el sistema general de actuación aparecen disfunciones:

- En el otorgamiento de licencia ambiental a campos petrolíferos se puede dar el caso de que el promotor tiene una autorización para instalar un número de pozos de extracción en una zona, y después de un tiempo de explotación, desea mover los pozos a una zona cercana, dentro del área para el que tiene autorizada la explotación. En estos casos sería más eficaz que el promotor tuviera cierta libertad de operación dentro del marco de su licencia, y no necesitara una nueva autorización para cualquier cambio.
- En proyectos de grandes inversiones, el promotor suele necesitar tener la licencia ambiental para que el banco le otorgue el préstamo. Sin embargo, previamente es necesario realizar el estudio de impacto ambiental y su revisión. Esto puede verse dificultado aún más si el promotor contrata el diseño y la construcción del proyecto mediante la fórmula “llave en mano” en la que el promotor no conoce el diseño real hasta que la empresa que ha conseguido el contrato de construcción lo diseña en detalle.

Beneficios:

Dotar de mayor flexibilidad al proceso de otorgamiento de licencia ambiental dará mayor seguridad jurídica al promotor, le facilitará la adaptación de su actividad a las necesidades de producción o de mercado, y contribuirá a reducir la carga administrativa tanto para el promotor como para el órgano ambiental, sin que por ello se pierda control del impacto ambiental de la actividad.

Acciones propuestas:

Se proponen las siguientes acciones para dotar de flexibilidad al licenciamiento ambiental:

- En el propio proceso de licencia, en la definición del alcance del estudio de impacto ambiental, solicitar al promotor que describa qué aspectos de su proyecto pueden ser objeto de variación a lo largo de la vida del proyecto (por ejemplo, en el caso del campo petrolífero mencionado, la

localización exacta de los pozos), y el efecto ambiental que esas modificaciones podría tener, y las medidas de prevención y mitigación a adoptar en esos casos. Después, en el momento de otorgar la licencia, autorizar esas variaciones (esos cambios mencionados en el estudio de impacto) e imponer las medidas de prevención y mitigación necesarias en el caso de que se den. Después, dejar libertad al promotor para que adopte o no los cambios, sin necesidad de nueva licencia ambiental, y someter la comprobación de que si adoptado las medidas de prevención y mitigación a la labor normal de inspección. Hacer lo mismo para ciertos aumentos en el tamaño o la capacidad del proyecto, de una magnitud a definir.

- En proyectos sujetos a fases de diseño progresivamente más concretas, que por ejemplo distingan diseño conceptual, diseño de factibilidad y diseño de detalle (para la ejecución), otorgar la licencia ambiental del proyecto en la fase de diseño de factibilidad, en la que se conozca el tipo de proyecto o actividad, la localización, los procesos implicados y su magnitud, En esta fase debería haber suficiente información como para poder definir las medidas de prevención y mitigación, al menos en términos de tipo de medida (incluso tipo de tecnología a aplicar) y nivel de reducción de impacto generado. Después, una vez se realiza el diseño de detalle del proyecto (que permite su construcción) únicamente sería necesario revisar, en su caso, las medidas de prevención y mitigación impuestas para ajustar algún aspecto que debiera ser menor o de detalle y no debiera afectar a la viabilidad técnica, económica o ambiental del proyecto. En todo caso, la administración pública siempre tiene la posibilidad de revisar estas medidas si, como consecuencia de inspecciones realizadas durante la fase de operación, se detectan aspectos nuevos o que no se consideraron de forma adecuada en la licencia ambiental. Sea el que sea el momento en que se otorgue la licencia, esta debiera ser definitiva¹⁵, aunque, una vez se haga el diseño de detalle del proyecto, puedan variar algo las medidas de prevención y mitigación que finalmente se definan. De otro modo, se generaría incertidumbre para el promotor.
- En proyectos “llave en mano” puede seguirse un proceso similar, adaptado: exigir al promotor la obtención de la licencia ambiental basada en el diseño básico. Si el promotor es público, en la fase de definición del proyecto se podrían analizar las posibles soluciones de diseño conceptual antes de la salida del proyecto a concurso público, desde el punto de vista de sus impactos y las medidas de prevención y mitigación a aplicar, y la adecuación de la localización prevista para el proyecto en función de los diseños conceptuales posibles. Para ello, el organismo sectorial promotor del proyecto se debería coordinar con el órgano competente ambiental (el Ministerio).

¹⁵ El único motivo para revocar o retirar la licencia debiera ser que los impactos ambientales significativos no hubieran sido adecuadamente evaluados en el momento en que se concedió la licencia y que, por tanto, no se hubieran definido medidas adecuadas de evitación o mitigación.

- Ver también más arriba el ejemplo de la actividad que vaya a instalarse en un emplazamiento para el que exista una licencia ambiental para ese tipo de actividad.
- Utilizar la definición de los términos de referencia del EEIA (ver también lineamiento más adelante sobre definición del alcance del EEIA) para definir aquellos aspectos que deban mejorarse en estos estudios. Por ejemplo, aspectos sociales, análisis de la normativa y obligaciones que establece, análisis de las políticas públicas y consecuencias para el proyecto, derechos preconstitucionales o de otro tipo, de consulta al público, de efectos del proyecto sobre aspectos del medio a proteger, efectos acumulativos del proyecto teniendo en cuenta otros proyectos existentes en el entorno de donde se va a localizar.
- Alargar el período de obligatoriedad de renovación de la licencia en lo posible, incluso haciéndola indefinida en actividades de menor tamaño (categoría 3) salvo que se produzcan cambios en la actividad (por ejemplo, un cambio significativo en el proceso, un aumento significativo en la capacidad o dimensión) o en el entorno de la misma (por ejemplo, un cambio en el planeamiento del territorio). Una forma de comprobar la evolución de la actividad o, incluso de saber si continúa en funcionamiento consiste en pedir que envíe informes periódicos sobre su comportamiento ambiental y sus instalaciones, procesos y actividades. Permitir pequeñas modificaciones no significativas en las actividades sin requerir una actualización de la licencia ambiental.

17.3. Categorización de actividades y proyectos nuevos

5. *Lineamiento: Categorizar las actividades sobre la base de un modelo más objetivo y estandarizado con las características que se describen más adelante.*

Hallazgo:

El Sistema de categorización de actividades parte de una evaluación del impacto de las actividades, pero se basa en una metodología que requiere utilizar criterios y ponderaciones no estandarizados y que pueden ser subjetivos y discrecionales. Por lo tanto, no resulta suficientemente transparente para los promotores, que en determinados casos pueden no saber a qué tipo de categoría corresponde su proyecto. De hecho, se producen discrepancias entre distintos organismos y entre consultores privados y revisores públicos, lo que indica que las decisiones técnicas tomadas para determinar la categoría de un proyecto tienen un cierto componente de discrecionalidad. Las actividades de la categoría 4 requieren en muchos casos un sistema costoso para la determinación de su categoría y para la gestión del proceso.

**Beneficios:**

El método propuesto proporciona más seguridad al promotor que, antes de iniciar su actividad, e incluso de considerar su localización, podrá valorar los costes y plazos que necesitará para obtener la licencia ambiental, y hacer una valoración del grado de protección ambiental que deberá adoptar. También facilitará la toma de decisiones favorables al medio ambiente por el promotor, por ejemplo, permitiéndole considerar opciones alternativas de localización (por ejemplo, dentro o fuera de una zona protegida). En el caso de los proyectos que quedarían excluidos de la necesidad de obtener la licencia, el método les proporciona mucha seguridad y reduce la actual incertidumbre. También evita a los distintos organismos de la administración que tengan que preparar listas de proyectos de la categoría 4 que quedan exentos de la licencia ambiental, lo que en los últimos años ha implicado la necesidad de establecerlo en normativa. Además, el método permitirá reducir en gran medida la carga administrativa de los funcionarios públicos (y de los consultores privados) asociada a la decisión de categorización.

Acciones propuestas:

Se propone categorizar las actividades sobre la base de un modelo más transparente, objetivo y estandarizado con las características siguientes:

- Las categorías se establecen en listas de actividades de categoría 1, 2 y 3 que incluyen las actividades que pertenecen a cada lista, las actividades se definen utilizando umbrales de dimensión o capacidad productiva.
- Categoría 1: Se refiere a actividades que, por sus características y dimensión, pueden dar lugar a impactos ambientales significativos. Para cada tipo de actividad de esa categoría se define un umbral de dimensión tal que por debajo de ese umbral las probabilidades de que una actividad tenga un impacto ambiental significativo son pequeñas. Las actividades por encima de ese umbral son de la categoría 1. Por ejemplo, una autopista de X kilómetros.
- Categoría 2: Son actividades que, por sus características y dimensión, es posible que se puedan producir impactos ambientales significativos, aunque su probabilidad sea baja. Estas actividades quedarían por debajo del umbral definido en las de Categoría 1, y por encima de un segundo umbral. Por ejemplo, ampliación del ancho de una carretera existente por más de 6 m, o extensión de una carretera por más de 10 km,
- Categoría 3. Son actividades que, por sus características y dimensión es poco probable que den lugar a impactos ambientales significativos, o cuyos posibles impactos y las medidas de prevención y mitigación a aplicar son conocidos. Estas actividades quedarían por encima de un tercer umbral, y por debajo del segundo umbral definido para la categoría 2. Las actividades que generen residuos industriales o peligrosos (distintos de los residuos sólidos urbanos), que tengan vertidos industriales



(distintos de aguas residuales urbanas), que generen emisiones a la atmósfera (por encima de un determinado nivel, por ejemplo, el de calderas de calefacción típicas de una comunidad de vecinos), o que se vean afectadas por la normativa de utilización de sustancias peligrosas, y no superen el mencionado segundo umbral quedarían en esta categoría. Un ejemplo de umbral sería construcción de una nueva carretera de menos de 10 km de longitud.

- Categoría 4. El resto de actividades no requiere licencia ambiental, desaparecería como categoría y no se mencionaría en la normativa. Podría tratarse de labores de mantenimiento de carreteras.

- Zonas protegidas: Requerir la realización de EEIA a actividades cuya localización caiga en zonas protegidas¹⁶.

- Zonas en las que exista un ordenamiento territorial definido: en los proyectos que se vayan a localizar en zonas en las que exista un ordenamiento del territorio con usos asignados tener en cuenta el grado de correspondencia entre el uso del territorio y el tipo de proyecto. Así, si el proyecto es compatible con el uso asignado al territorio, simplificar el procedimiento de licenciamiento y reducir las exigencias¹⁷; si el proyecto no es compatible con el uso asignado al territorio no autorizar el proyecto, o, si esto no es posible, pedir un estudio de impacto ambiental más amplio que el que normalmente se pediría (por ejemplo, si es un proyecto de categoría 3, pedir un EEIA).

- Discrecionalidad: Dotar de cierta discrecionalidad al órgano ambiental para que pueda considerar de categoría de una actividad en función de su localización, concretamente, de la sensibilidad del entorno. El órgano ambiental competente deberá justificar su decisión.

- Flexibilidad ante nuevas tecnologías o procesos: Requerir que actividades cuya técnica o tecnología sea nueva¹⁸ y no contemplada en el momento de elaborar estos criterios, sea sometida a una categorización específica por la autoridad competente.

¹⁶ En relación con la ubicación del proyecto, únicamente se propone la consideración de si la zona a ocupar por el proyecto está o no protegida. Esto tiene la ventaja de ser simple y transparente para el promotor, que únicamente debe conocer cuáles son las zonas protegidas.

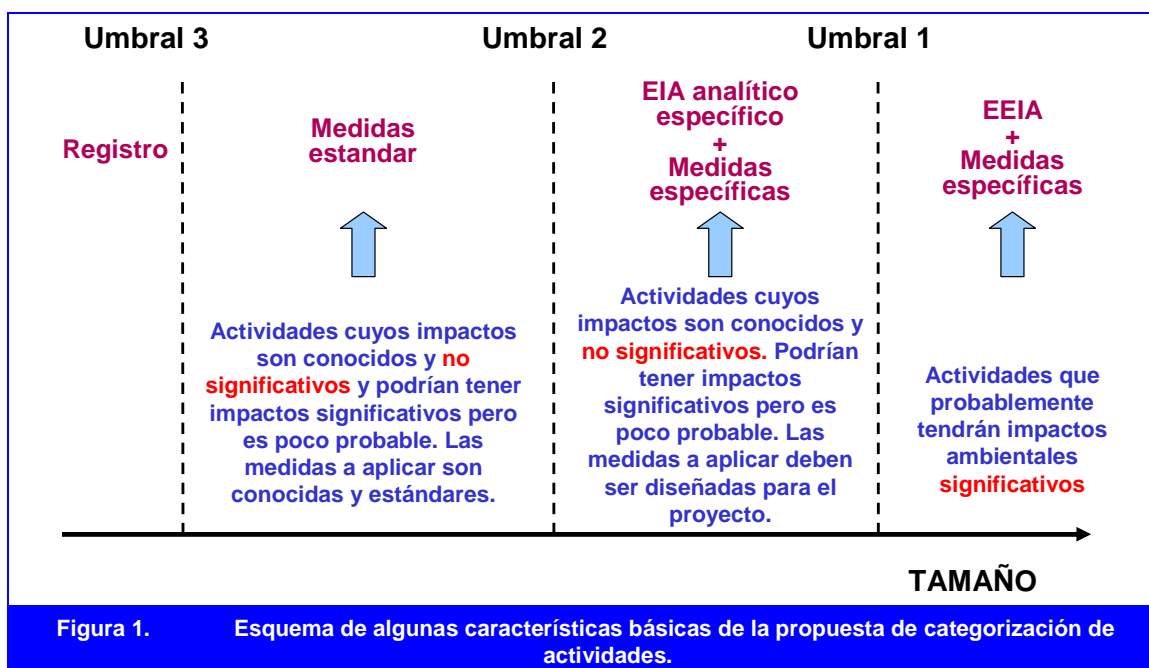
¹⁷ Por ejemplo, si es un proyecto residencial en una zona designada para un uso residencial no exigir EEIA aunque el proyecto tenga una dimensión grande. Si es un proyecto industrial que va a localizarse en una zona destinada a un uso industrial reducir el requisito de estudio ambiental.

¹⁸ En este contexto se entiende como actividad nueva aquella que no exista en Bolivia en el momento de aprobarse la normativa. El órgano ambiental puede decidir la categoría de actividades nuevas a partir de la información que proporcione el promotor sobre el impacto ambiental conocido de la actividad obtenida en estudios realizados en otros lugares.

Las actividades que ahora son de categoría 4 podrán ser conocidas por estar registradas en el Registro de Comercio que lleva la empresa FUNDEMPRESA, o en los registros sectoriales creados en los distintos órganos sectoriales.

El Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (2002) ya incorpora en uno de sus anexos una categorización de actividades industriales en función de criterios de dimensión o capacidad productiva, es decir, este tipo de medida ya existe en el país en algunos casos.

La siguiente figura muestra de forma esquemática algunas características básicas de la propuesta.



En la tabla siguiente se proponen las acciones a realizar para llevar a cabo esta alternativa.

Tabla 9. Acciones propuestas para poner en práctica el Lineamiento						
Acción		Responsable	2017	2018	2019	2020
Generación de conocimiento						
1	Definir una propuesta de categorización de actividades	Ministerio Colaboran: organismos sectoriales	■			
2	Adoptar una categorización e incorporarla en nueva normativa	Ministerio		■		



17.4. Las actividades existentes

6. *Lineamiento: Revisar el método para otorgar la licencia ambiental para actividades sin licencia ambiental iniciadas posteriormente al plazo establecido en la normativa.*

Hallazgo:

El Manifiesto Ambiental y la Declaratoria de Adecuación Ambiental se están utilizando para legalizar actividades que iniciaron su actividad después del plazo habilitado por la normativa para el uso de este instrumento, incluso aunque la categoría que habría correspondido a la actividad habría sido 1 ó 2 si hubiera obtenido la licencia ambiental antes de iniciar la actividad. Esto tiene el efecto negativo de incentivar el inicio de actividades sin legalizar, para legalizarlas después por esta vía, especialmente si corresponden a categorías 1 y 2.

Beneficios:

Si la práctica del órgano competente es aceptar que actividades existentes obtengan la licencia ambiental mediante el Manifiesto Ambiental y la Declaratoria de Adecuación Ambiental, aunque su inicio haya sido posterior al año límite que establece la normativa para esta vía, las nuevas actividades se verán tentadas de iniciar su actividad, y después tratar de obtener la licencia ambiental. Probablemente ello les convenga, incluso aunque tengan que hacer frente a una sanción. En cambio, si se cerrara esa posibilidad y únicamente se les diera la opción de seguir el procedimiento como si fueran nuevas se conseguiría que todas las actividades siguieran el mismo proceso de legalización, mantener el mismo trato para todas por la administración pública (de otro modo, el trato no es igual), y, si se definiera una sanción para las que hubieran iniciado su actividad sin haber previamente obtenido la licencia ambiental, se estaría incentivando a las nuevas actividades a seguir el procedimiento normal, es decir, obtener la licencia ambiental y después iniciar la actividad. Este método se debería aplicar incluso a actividades que sí se iniciaron antes de la aprobación del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, para las que se diseñó la vía del Manifiesto Ambiental y de la Declaratoria de Adecuación Ambiental, pues el plazo para ello ha pasado hace mucho (año 2000).

Acciones propuestas:

Considerar la posibilidad de eliminar de la normativa la posibilidad de obtener la licencia ambiental mediante la presentación del Manifiesto Ambiental y la posterior Declaratoria de Adecuación ambiental de forma que todas las actividades deban seguir el proceso de las nuevas aunque estén en funcionamiento (independientemente de cuándo empezaron a funcionar) y, por ejemplo, realizar un



EEIA si su categoría lo requiere. En ese escenario, siguiendo el proceso que establece la normativa para ello, sancionar al promotor que realice una actividad sin la necesaria licencia ambiental.

17.5. La Evaluación de impacto ambiental.

7. *Lineamiento: Convertir la definición del alcance del EEIA en un instrumento que contribuya a mejorar la calidad de los EEIA y, junto con las medidas de prevención y mitigación, a implantar las políticas ambientales y a asegurar la calidad ambiental del medio.*

Hallazgo:

La definición del alcance del EIA no está suficientemente detallada y no favorece la calidad posterior de los EIA ni el uso de los EIA como instrumentos que reflejen las prioridades políticas ambientales.

La normativa sólo establece la obligación de que el órgano ambiental defina el alcance del EIA para los proyectos de categoría 2 (aunque en la práctica se realiza para los de categoría 1 también). Para proyectos de categoría 1 y 2 sólo se exige la presentación de la ficha ambiental, que es insuficiente para definir en detalle el alcance del EIA. Esto aumenta las probabilidades de que el alcance definido sea genérico y de que el órgano ambiental, posteriormente al revisar el EEIA finalmente presentado, lo considere insuficiente.

Beneficios:

La definición del alcance del EEIA es una de las claves que pueden contribuir a mejorar varios de los problemas identificados por los participantes en el proceso de licenciamiento de proyectos que requieren EIA. Una definición del alcance del EEIA que haya considerado las preocupaciones del público, y que defina en detalle el alcance que el EEIA debe tener reducirá los casos en que el posterior EEIA es considerado insuficiente por los funcionarios responsables de su revisión. Para ello, el alcance deberá indicar, por ejemplo, los aspectos a analizar en el EEIA, el alcance geográfico del análisis de cada aspecto, las metodologías aceptables para la obtención de datos y su análisis, la metodología para evaluar los impactos ambientales y los criterios para definir las medidas de prevención y mitigación.

Acciones propuestas:

- Elaborar una guía para los promotores que detalle el contenido que debe tener el informe para la definición del alcance del EEIA (ver siguiente acción).
- Definir en la normativa que en los proyectos de Categorías 1 y 2 el Representante Legal también debe:



- Iniciar el proceso de obtención de la licencia ambiental presentando un informe completo en el que se realice un análisis del proyecto y del medio en el que éste se localizará. Este análisis debe ser más detallado que el de la Ficha Ambiental, y dirigidos específicamente a proporcionar la información que ayude a definir de forma detallada el alcance del EEIA.
- Realizar acciones dirigidas a implicar al público con el fin de conocer sus preocupaciones en materia ambiental antes de que se defina el alcance del EEIA, e incluir en el informe anterior las preocupaciones del público identificadas.
- proponer el alcance (detallado y específico) del EIA,

Será la autoridad Ambiental competente quien defina finalmente el alcance del EIA, teniendo en cuenta la información presentada por el promotor y sus prioridades ambientales.

- Posteriormente, el análisis del EEIA se realizará tomando como referencia el alcance definido, para lo que éste deberá haber sido detallado. Se analizarán las medidas de prevención y mitigación para comprobar si ayudarán a cumplir los objetivos de la política ambiental y a asegurar la calidad ambiental del entorno del proyecto.

8. *Lineamiento: En proyectos de categoría 1, promover la implicación del público por el promotor antes de la definición del alcance del EEIA, para identificar las preocupaciones del público en relación al proyecto y poderlas considerar en la definición del alcance del EEIA.*

Hallazgo:

La consulta al público en el proceso de EIA está definida de forma muy genérica. La forma en que se define la obligación de participación pública permite la posibilidad de que en el EEIA el representante legal no haga consulta pública, y descargue en la Autoridad Competente las consultas al público.

Beneficios:

Adecuar la metodología para la consulta pública al riesgo ambiental del proyecto permitirá una consulta eficaz y eficiente, centrada en mejorar la adecuación medioambiental del proyecto. La presencia de la autoridad ambiental competente en las consultas públicas permitirá asegurar que se realizan adecuadamente.

Acciones propuestas:

Modificar la normativa para incluir los siguientes aspectos:

- La obligación del promotor de realizar una consulta al público similar a la que define el artículo 31 del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (D.S. N° 26736), aumentando el



período en que la documentación está disponible para comentarios a 30 días para proyectos de categorías 2 y 3 y a 45 días para proyectos de categoría 1, requiriendo que el promotor realice una reunión con el público sólo en proyectos de categoría 1, y requiriendo que en esa reunión esté presente el órgano ambiental competente.

- En proyectos de categorías 1, 2 y 3, requerir que el promotor realice la consulta al público como la descrita

9. *Lineamiento: Modificar el modelo de revisión del EEIA y la participación de los distintos actores que intervienen. La documentación presentada por el promotor debiera ser recibida por el órgano ambiental, quien debiera dirigir el proceso de revisión, enviando la documentación a los organismos sectoriales relevantes y solicitándoles sus comentarios. La revisión de la documentación debiera ser realizada simultáneamente y en paralelo por estos organismos sectoriales y por el órgano ambiental competente y éste debiera compilar los comentarios relevantes a la documentación y enviárselos al promotor. Tender a eliminar la homologación de informes.*

Hallazgo:

Excesivo tiempo para revisión de informes. Se realizan revisiones sucesivas de la documentación, primero por los organismos sectoriales y después por el órgano competente, lo que contribuye a alargar el proceso. Se requiere la homologación por el órgano ambiental nacional de los informes elaborados por los departamentos. Se considera que los plazos actuales para la revisión de EEIA (30 días para los organismos sectoriales e igual plazo para el órgano ambiental competente) son excesivamente cortos para proyectos de la categoría 1 y 2.

Beneficios:

En el caso de que se realice una revisión simultánea y en paralelo de los informes de solicitud de licencia ambiental por todos los organismos que participan, especialmente de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, el tiempo total desde que el promotor entrega el estudio hasta que obtiene la licencia ambiental podría verse reducido a algo menos de la mitad si no cambiaran los plazos actuales disponibles. Si se elimina la necesidad de homologación de informes, también pueden reducirse los plazos.

El número de días disponible para la revisión de los EEIA debiera aumentarse al menos hasta 60 días. Con una revisión de los EEIA en paralelo y simultánea por todos los organismos implicados, incluso si el plazo de revisión se aumentara a 60 días, el plazo total necesario para revisar los informes se reduciría respecto al actual, pues las correcciones propuestas por todos los organismos que intervienen serían integradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con lo que se eliminará

la posibilidad de que diferentes criterios entre organismos lleven al promotor a rehacer cambios en los informes.

Acciones propuestas:

- Modificar la normativa de forma que ésta indique que:
 - El proceso sea dirigido por el órgano ambiental: se inicie con la entrega por el promotor de la documentación de solicitud de licencia ambiental al órgano ambiental¹⁹, sea éste quien solicite a los distintos organismos que deban participar el análisis y sus comentarios al proyecto y a la documentación presentada por el promotor.
 - La revisión de los informes de solicitud de licencia ambiental sea realizada de forma simultánea y en paralelo por todos los organismos que participen.
 - El órgano ambiental tenga la responsabilidad de recopilar, integrar y resolver las posibles divergencias entre los comentarios recibidos de los distintos organismos intervinientes²⁰, y de remitírselas, en su caso, al promotor, para que realice las modificaciones necesarias a la documentación presentada.
- Incorporar al sistema de revisión no sólo a los organismos sectoriales correspondientes, sino otros Departamentos del Gobierno con conocimientos específicos relevantes en cada caso: de la misma forma que se hace con el SERNAP, hacerlo con arqueología (cultura) y otros. En cada proyecto, el Ministerio debería decidir qué organismos deben ser incorporados al proceso, en función de las características del proyecto y de su localización. En proyectos especialmente grandes o difíciles, en el caso de que sea necesario, realizar una reunión entre el Ministerio y los otros organismos para aclarar criterios.
- Evitar el análisis de documentos como la FA y el MA por más de un organismo. Realizar el análisis por más de un organismo (Ministerio-Organismo Sectorial-SERNAP-otros, o bien Departamento-Organismo Sectorial-otros) sólo en el caso de los EEIA.

¹⁹ Incluso aunque se habilitara la posibilidad de que la entrega de la documentación se haga a la autoridad municipal para facilitar el trámite al promotor, debería ser el órgano ambiental quien reciba la documentación y dirija el proceso de análisis y otorgamiento de la licencia, distribuyendo copias de la documentación a los organismos que participarán en el análisis de la documentación.

²⁰ Así se evitaría que el promotor recibiera peticiones contradictorias sucesivamente de distintos organismos.



- En lo posible, para proyectos grandes o complicados, realizar la revisión de informes mediante equipos de revisión formados por más de una persona, con el fin de dotar estos equipos de mayor robustez técnica.
- Eliminar la homologación de informes por distintos organismos. Una vez que los Departamentos y los Municipios se hayan dotado de una capacidad suficiente, no será necesario que el Ministerio competente en materia ambiental homologue los informes elaborados por estos organismos. La elaboración de guías, el establecimiento de criterios estandarizados para la toma de decisiones, la categorización explícita de las actividades y la formación y capacitación de los Departamentos y Municipios debieran conseguir que en el futuro no sea necesaria la homologación de los informes por el Ministerio. Mientras estos instrumentos no estén desarrollados, será necesario que el Ministerio competente en materia ambiental se esfuerce en capacitar a Departamentos y Municipios y, en caso de que éstos lo soliciten, podrá revisar los informes elaborados por Departamentos y Municipios.
- Crear organismos de coordinación en materia medioambiental y, en particular sobre licencias ambientales, entre los distintos organismos con competencias en esta materia, de forma similar a como se ha realizado con el Consejo de Coordinación Sectorial en materia de residuos.

17.6. La fase de operación: seguimiento y monitoreo

10. Lineamiento: Priorización del proceso de inspección y mejora de su eficiencia. Modificar el régimen de sanciones para hacerlo proporcional al grado de afección al medio ambiente producido por la infracción, y disuasorio.

Hallazgo:

Insuficiencia del proceso de fiscalización y sanción. Gestión operativa poco eficiente de la inspección. Las sanciones están graduadas en cierta medida, pero no proporcionan suficiente flexibilidad al no hacer depender la multa del efecto ambiental generado por la infracción. Existen numerosas actividades pendientes de legalización. En las labores de inspección no se pueden tomar muestras porque no existe presupuesto suficiente para ello²¹.

²¹ Ver también hallazgos y lineamientos más adelante sobre las capacidades de los laboratorios de análisis.

**Beneficios:**

Mejorar el proceso de inspección tendrá los siguientes beneficios: contribuirá a que las actividades en operación con licencia ambiental interioricen la necesidad de proteger el medio ambiente y mantengan en el tiempo la protección del medio ambiente; ayudará a que actividades que aún no han obtenido la licencia ambiental la obtengan, con lo que tenderán a mejorar la protección del medio ambiente incorporando medidas de prevención, mitigación y control de sus impactos ambientales; en general, tendrá un efecto aleccionador sobre todas las actividades en funcionamiento; proporcionará información e indicadores del estado del medio ambiente y de los impactos ambientales reales de las actividades en funcionamiento, lo que ayudará a retroalimentar el sistema de licenciamiento y control para su mejora continua, por ejemplo, modificando las condiciones que deberán cumplir las actividades para obtener y mantener su licencia ambiental.

Acciones propuestas

- Realizar inspecciones únicamente por funcionarios de un organismo (Ministerio o Departamento) y únicamente por más de uno si es para capacitar al personal o en visita dirigida a confirmar hallazgos de cara a sancionar.
- Modular las infracciones y las sanciones de forma que sean graduales y diferentes para distintos niveles de infracciones (muy graves, graves, leves,...), de manera que el sistema sea aleccionador y proporcionado (ejemplo en los artículos 44 a 49 de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos²²). Considerar en la práctica de las sanciones el efecto sobre el medio ambiente de la infracción para graduar las sanciones. Establecer criterios y guías para distintas actividades de manera que, en caso de incumplimiento, éste sea claro y las alegaciones no tengan fundamento.

17.7. Guías

11. *Lineamiento: Homogeneizar los criterios técnicos y ambientales a emplear en el licenciamiento de actividades, mediante la coordinación de criterios entre el Ministerio y los organismos sectoriales.*

Hallazgo:

En el proceso de licenciamiento ambiental distintas administraciones tienen diferentes criterios.

²² Aunque la magnitud de las sanciones para personas jurídicas no parece muy elevada.

**Beneficios:**

Los beneficios de definir explícitamente los criterios a seguir y hacerlos públicos son varios: se consigue recopilar el conocimiento existente en distintos organismos públicos y distribuirlo a los potenciales usuarios de ese conocimiento (consultores, promotores, funcionarios públicos en formación); se aporta certidumbre a los promotores y consultores sobre lo que pueden esperar en relación a cómo serán juzgados sus proyectos, los informes presentados y las medidas de prevención y mitigación aceptables; la tramitación de las solicitudes de licencias puede hacerse en menos tiempo, en la medida en que el diseño de los proyectos, de las medidas de prevención y mitigación y los EEIA tengan en cuenta esos criterios, pues serán necesarias menos correcciones a estos aspectos en la tramitación de las licencias; se conseguirá una mejor protección ambiental, en la medida que los criterios elaborados contribuyan a diseñar proyectos y medidas de prevención y mitigación que aseguren la protección del medio ambiente.

Acciones propuestas:

- Elaborar guías con requisitos mínimos a cumplir por las actividades, y
- Formar a organismos sectoriales, departamentos y, en su caso, a municipios.

12. Lineamiento: Elaborar guías para mejorar la calidad de los estudios presentados con el fin de que las medidas de prevención y mitigación que sean más apropiadas y de que su tramitación y corrección lleve menos tiempo.

Hallazgo:

Mala calidad de los trabajos presentados.

Beneficios:

La elaboración de guías para la preparación de la documentación necesaria para solicitar la licencia ambiental y, en particular, para la realización de EEIA, para la preparación del alcance de los EEIA, la realización de estudios de línea de base, etc. permitirá que estos documentos estén mejor preparados por los consultores, ahorrará tiempo a los funcionarios públicos encargados de la revisión de estos informes, y permitirá una tramitación de la licencia ambiental en menor tiempo. Además, las guías debieran servir para definir los requisitos mínimos a cumplir por los consultores en sus trabajos y, por tanto, como referencia para tomar decisiones de retirada de consultores del registro RENCA en caso de malas prácticas profesionales o de trabajo insuficientes.

Aunque la definición de guías metodológicas puede llevar tiempo, en Bolivia existen algunas ya elaboradas para la tramitación de expedientes en algunos sectores (hidrocarburos, minería,

multisector), con lo que la medida únicamente extendería el alcance o profundidad de lo ya existente, o lo aplicaría a otros sectores y ámbitos.

Acciones propuestas:

Elaborar guías para los aspectos siguientes:

- Preparación de propuestas de alcance de EIA.
- Requisitos mínimos de los trabajos de consultoría (especialmente de EIAs) que permitan establecer claramente para el consultor y el funcionario público cuándo un trabajo es pobre, de forma que se reduzca la incertidumbre para el consultor y la discrecionalidad del funcionario público.
- Medidas de prevención y mitigación mínimas para cada sector relevante;

También pueden utilizarse de forma temporal guías existentes en otras zonas (guías europeas, de la EPA, del Banco Mundial, otros).

- Recabar la participación de los organismos sectoriales para que elaboren guías específicas sectoriales, o que aporten su conocimiento especializado en las guías generales, con el fin de que los documentos presentados para la solicitud de licencia ambiental sean lo más adecuados posibles a la problemática ambiental de cada sector.

17.8. Tiempo de tramitación y fechas límite

13. Lineamiento: Revisar los plazos definidos para determinados pasos del procedimiento de otorgamiento de licencias, especialmente en proyectos de Categoría 1, y aumentarlos.

Hallazgo:

Los plazos de algunos pasos del procedimiento de otorgamiento de licencias resultan excesivamente cortos, especialmente para proyectos grandes y para la revisión de EEIA.

Beneficios:

En un escenario en que los organismos realizan el análisis de los informes en paralelo, unos plazos más largos para la revisión de documentos, especialmente los EEIA, permitirán que los distintos organismos que deban ser consultados por el órgano ambiental competente puedan tener tiempo para recibir la documentación con tiempo suficiente, para revisarla simultáneamente y en paralelo, para emitir sus comentarios, y para que el órgano competente pueda después compilar e integrar los comentarios de los distintos organismos y enviárselos al promotor. El alargamiento de este plazo no necesariamente va a alargar el proceso en total, pues éste va a depender más del número de veces



que sea necesario corregir los documentos por ser insuficientes, y ello dependerá de su calidad. A su vez, esta calidad dependerá de la calidad de los consultores y de la de las guías para la preparación de los documentos y estudios necesarios para la obtención de la licencia ambiental. En la actualidad, los documentos presentados por los consultores sufren a menudo al menos una corrección pedida por el órgano sectorial y otra por el órgano ambiental. Considerando que los organismos públicos dispongan de 30 días para revisar el informe, y el consultor de otros 30 para corregirlo, si se dan las mencionadas dos correcciones a un informe, al final del proceso para el promotor habrán transcurrido al menos 120 días desde que el EEIA fue entregado por primera vez en el organismo sectorial hasta que se finaliza la revisión final por el órgano competente. En comparación con esos 120 días, los 30 disponibles para cada organismo para revisar los informes son pocos.

Acciones propuestas:

- Revisar los plazos para la revisión de los documentos relacionados con la obtención de la licencia ambiental y aumentar los plazos para la revisión de los informes de EEIA.
- Establecer en la normativa plazos que limiten el tiempo disponible para que el promotor realice determinados pasos. Por ejemplo:
 - Cuando el órgano ambiental competente solicite información adicional, o correcciones a la documentación presentada, un plazo para que el promotor envíe la documentación solicitada (por ejemplo, 30 días).
 - Un límite para el número de veces en que la documentación presentada por el promotor puede ser corregida o ampliada, antes de que se suspenda el proceso de otorgamiento de licencia, por ejemplo, dos veces.
 - Cuando el órgano ambiental elabore el documento de alcance del EEIA, un plazo para que el promotor presente el EEIA (es decir, un plazo límite de validez del documento de alcance), por ejemplo, 2 años.

17.9. Silencio administrativo positivo

14. *Lineamiento: Revisar la consideración de silencio administrativo positivo para los procedimientos administrativos de concesión de licencia ambiental en proyectos de categoría 1.*

Hallazgo:

El silencio administrativo positivo unido a plazos de tramitación cortos puede dar lugar en proyectos grandes a que se acepten las medidas de prevención y mitigación insuficientes.

Beneficios:

Eliminar el silencio administrativo positivo para proyectos de categoría 1 reduciría la probabilidad de que el análisis por el funcionario público de la documentación presentada por el promotor no fuera lo suficientemente profundo por falta de tiempo.

Acciones propuestas:

Eliminar el silencio administrativo positivo en los proyectos de categoría 1.

17.10. Consultores ambientales

15. Lineamiento: Continuar la estrategia de aumentar los requisitos a consultores para la realización de trabajos ambientales especialmente complejos, por ejemplo, EIAs de proyectos de Categoría 1, especialmente de los grandes.

Hallazgo:

La documentación y los trabajos presentados por los promotores (elaborados por los consultores) para la solicitud de licencias ambientales son frecuentemente de calidad insuficiente. En la actualidad los documentos presentados por los consultores casi siempre requieren correcciones. Así, un consultor ambiental con una larga experiencia relataba el caso de su empresa, que de más de 700 documentos presentados a lo largo de varios años, únicamente uno no recibió ninguna petición de subsanación. La calidad de los trabajos de consultoría ha sufrido un deterioro en los últimos años.

En el Reglamento de Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA) no existe gradación en categorías profesionales de los consultores de acuerdo a su experiencia. No se establecen registros diferentes para diferentes tipos de estudios ambientales especialmente relevantes, como por ejemplo EEIAs y dentro de éstos, EEIAs de proyectos especialmente complejos, o para realización de auditorías ambientales. Se está elaborando un nuevo borrador del Reglamento RENCA en el que se está definiendo el requisito de formar equipos multidisciplinarios para determinados trabajos.

Beneficios:

Contribuir a mejorar la calidad de los documentos presentados para la solicitud de licencia ambiental y, en consecuencia, a reducir los plazos para el otorgamiento de licencias, por reducirse el tiempo necesario para corregir deficiencias en estos documentos.

**Acciones propuestas:**

- Registrar consultores específicamente para realizar EIA (no agrupados con otras competencias).
- Exigir requisitos elevados a consultores que pretendan realizar EIAs de proyectos de categoría 1, en términos de experiencia del consultor líder del equipo y del equipo puesto a disposición del proyecto.
- Permitir que consultores que vayan adquiriendo experiencia en proyectos menores (por ejemplo, de Categoría 2) puedan acceder a realizar proyectos de categoría 1.
- No exigir el registro de consultores especialistas en materias concretas (por ejemplo geología, zoología, botánica, ingeniería civil) en aquellos ámbitos en que su licenciatura les habilita suficientemente para ejercer su profesión.
- Penalizar los trabajos pobremente realizados para desincentivar esta práctica.
- Permitir el contacto entre el consultor y el funcionario público o equipo de funcionarios que revisan los documentos para aclarar dudas durante el análisis de la documentación presentada.

Todo ello debería contribuir a una mejora de los trabajos y a un acortamiento del tiempo de tramitación de expedientes.

17.11. Recursos materiales y financieros

16. Lineamiento: Promover la toma de conciencia en los organismos sectoriales que no asignen suficientes recursos a aspectos de licenciamiento ambiental en proyectos públicos.

Hallazgo:

Insuficiente asignación de recursos a aspectos relacionados con la obtención de la licencia ambiental en proyectos públicos, tanto para la realización de Estudios de EIA como para implantar medidas de prevención y mitigación. Insuficiente asignación de recursos y medios en el Ministerio y los Departamentos para labores de inspección (por ejemplo, para realizar análisis de vertidos o de emisiones a la atmósfera).

Beneficios:

Una mayor asignación de recursos por los organismos sectoriales responsables de iniciar proyectos públicos a la realización de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, a la implantación de medidas de prevención y mitigación, y a las labores de monitoreo y control de las actividades durante su fase de operación redundará en una mejora de la protección del medio ambiente. La dotación de mayores recursos para las labores de inspección, particularmente para la toma de muestras y análisis

químico, permitirá realizar un mejor seguimiento de las actividades en operación, y detectar de forma temprana emisiones que puedan dar lugar a impactos ambientales significativos. También promoverá la toma de conciencia de las actividades respecto a la protección ambiental.

Acciones propuestas:

- Coordinar con los técnicos y responsables políticos encargados de preparar los presupuestos de los proyectos los criterios para la asignación de recursos para EEIA y medidas de mitigación y monitoreo.
- Informar de los casos en que se observe que los recursos asignados son insuficientes.
- Proporcionar valores de comparación de proyectos similares o cercanos de otros sectores.
- Analizar la posibilidad de cobrar tasas por el proceso de licenciamiento y por los costes de monitoreo con el fin de recabar recursos que ayuden a financiar estos costes.

17. Lineamiento: promover la mejora de laboratorios de análisis en materia de calidad.

Hallazgo:

Falta de capacidades en materia de calidad en los laboratorios. Muy pocos laboratorios existentes en Bolivia cuentan con sistemas de acreditación de los análisis químicos que realizan.

Beneficios:

Promover la implantación en los laboratorios de análisis de sistemas de gestión de la calidad y de acreditación de sus análisis químicos redundará en la mejora de la calidad y en una mayor fiabilidad de sus análisis. Como consecuencia de ello, las decisiones que los distintos actores que participan en la gestión del medio ambiente y en la protección de la calidad ambiental serán mejores si se basan en información de más calidad.

Acciones propuestas:

- Favorecer la implantación de sistemas de gestión de la calidad y de acreditación de las técnicas analíticas en laboratorios de análisis de aguas, suelos y emisiones al aire.
- Promover que los laboratorios acreditados en calidad analítica tengan más ventajas competitivas frente a sus competidores no acreditados, por ejemplo, exigiendo que los análisis que realicen o encarguen los organismos públicos y los promotores estén realizados en laboratorios con determinada acreditación.

- Promover con la entidad de acreditación el aumento progresivo de los requisitos de acreditación a medida que los laboratorios vayan incorporando mayores capacidades en materia de calidad de sus análisis.

18. Lineamiento: Promover el empleo del SNIA para el proceso de licenciamiento ambiental, especialmente para proyectos en los que el trámite administrativo sea sencillo, para proporcionar información a promotores y consultores y el público en general, y para la obtención de indicadores que faciliten la gestión de los expedientes administrativos y, en general, la toma de decisiones en materia de medio ambiente.

Hallazgo:

Existe un sistema informatizado, el Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA) que puede facilitar determinados aspectos del sistema de licenciamiento.

El SNIA puede utilizarse para proporcionar información a promotores y consultores de forma que se mejore el proceso de licenciamiento ambiental y que se alivie la carga de los funcionarios públicos en facilitar esta información. Por ejemplo, proporcionando información sobre el proceso de licenciamiento, guías, criterios del organismo competente, tiempos indicativos de tramitación, respuestas a dudas. En un siguiente nivel puede proporcionar información sobre el estado de cada expediente administrativo en trámite. La realización de trámites directamente puede requerir una infraestructura más compleja, incluido el sistema de autenticación de la persona que realiza el trámite.

Existe ya una experiencia iniciada en el sector de telecomunicaciones dirigida a tramitar en línea (directamente en Internet) algunas licencias. Después, se prevé trabajar con el sector de hidrocarburos y de transporte en esta misma línea.

Beneficios:

Facilitar información mediante una herramienta informatizada disponible en Internet tiene varios beneficios:

- Liberar tiempo de funcionarios públicos dedicado a resolver dudas de promotores o a facilitarles información
- Permite a los promotores acceder a información de su interés, a un coste reducido. Por ejemplo, el estado de tramitación de su expediente, el procedimiento para solicitar la licencia ambiental, los plazos esperables para obtener la licencia ambiental.
- Potencialmente permite distribuir información a un gran número de interesados simultáneamente (promotores, consultores).

- Distribuir criterios adoptados por los organismos públicos, o guías de diverso tipo a los interesados, y actualizarlas con un coste bajo de distribución.

Acciones propuestas:

- Definir la información a aportar en la herramienta informática.
- Estimar el presupuesto necesario para realizar las modificaciones deseadas en la herramienta informática. Asignar el presupuesto en el presupuesto anual del órgano competente.
- Contratar la realización de las modificaciones, y realizarlas.
- Como una estrategia a largo plazo, poner en marcha una herramienta en formato de Sistema de Información Geográfica que incorpore la información sobre el medio disponible en las administraciones públicas (geología, hidrología, hidrogeología, flora, fauna, zonas protegidas, actividades, población, etc.) y la facilite a todos los posibles interesados: funcionarios públicos, promotores, consultores, investigadores, etc.

19. Lineamiento: Promover la dotación de recursos económicos por los promotores para financiar el proceso administrativo del otorgamiento de licencias y las labores de control durante la operación

Hallazgo

En la actualidad, los medios materiales y recursos para las labores administrativas del otorgamiento de licencias y para la realización del control posterior de las actividades son claramente escasos en muchos municipios, en los departamentos, e incluso en el Ministerio competente en materia de medio ambiente.

Beneficios:

Disponer de medios económicos y de recursos humanos capacitados en los distintos niveles de la administración encargados del otorgamiento de licencias y del control posterior de las actividades contribuirá a la reducción del número de actividades que están operando sin licencia ambiental y sin unas adecuadas medidas preventivas y de mitigación, a mejorar la actuación ambiental de las que tienen licencia y, en definitiva a la preservación de la calidad ambiental. Esto es particularmente relevante en departamentos y municipios si van a asumir en el futuro estas responsabilidades. Además, esto permitirá al Ministerio competente en materia de medio ambiente dedicar más recursos a otras responsabilidades que también contribuirán a una mejora de la calidad ambiental (por ejemplo, definición de metodologías, desarrollo de políticas, evaluación estratégica de planes y programas, y otros.)

Acciones propuestas:

- Incorporar en la normativa cantidades a aportar por el promotor al organismo competente que le corresponda en materia de licencia ambiental (Ministerio, departamento, municipio), para financiar la tarea administrativa de otorgamiento de licencia, y de seguimiento y control.
- Incorporar la figura de un fondo a dotar por el promotor de un proyecto a nombre del organismo competente en materia de licenciamiento ambiental, para hacer frente a cualquier daño al medio ambiente que se produzca como consecuencia de su actividad, y para financiar el adecuado cese y cierre de la actividad y la devolución del medio a un estado adecuado para el uso futuro que vaya darse al emplazamiento en el que se localizó la actividad.

18. Referencias

Constitución Política del Estado Nacional de Bolivia, 21 de Octubre de 2008.

Ley de Medio Ambiente, N° 1333, de 27 de Abril de 1992.

Ley de Hidrocarburos. Ley 3058, de 18 de Mayo de 2005.

Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ley N° 31, de 19 de Julio de 2010.

Ley de Derechos de la Madre Tierra, N° 71 de 21 de Diciembre de 2010.

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, N° 300 de 15 de Octubre de 2012.

Ley de Gestión Integral de Residuos. Ley N° 755, de 28 de Octubre de 2015.

Reglamento General de Gestión Ambiental. Decreto Supremo N° 24176 de 8 de Diciembre de 1995.

Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Decreto Supremo N° 24176 de 8 de Diciembre de 1995.

Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica. Decreto Supremo N° 24176 de 8 de Diciembre de 1995.

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. Decreto Supremo N° 24176 de 8 de Diciembre de 1995.

Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas. Decreto Supremo N° 24176 de 8 de Diciembre de 1995.

Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. Decreto Supremo N° 24176 de 8 de Diciembre de 1995.

Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. Decreto Supremo N° 24335 de 19 de Julio de 1996.

Reglamento de Áreas Protegidas. Decreto Supremo N° 24781, de 31 de Julio de 1997.

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. Decreto Supremo N° 24782 de 31 de Julio de 1997.

Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero. Decreto Supremo N° 26736, de 30 de Julio de 2002.

Reglamento Ambiental para el Aprovechamiento de Áridos y Agregados. Decreto Supremo N° 91, de 22 de Abril de 2009.

Decreto Supremo N° 28592 de 17 de Enero de 2006.

Decreto Supremo N° 29033, de 17 de Febrero de 2007.

<http://www.worldbank.org/en/country/bolivia>

Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Bolivia. (2015) Memoria de la Economía Boliviana 2014.

Normativa de Perú.

Ley N° 27446, de 23 de Abril de 2001. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

Normativa de Colombia

Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

Decreto n° 2041, de 2014, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.



Normativa de Ecuador

Acuerdo No. 061 Reforma del Libro VI del texto unificado de legislación secundaria. 4 de Mayo de 2015.